

Septiembre 28 de 1946

50ª REUNION — 45ª SESION ORDINARIA

Presidencia del doctor JUAN HORTENSIO QUIJANO, vicepresidente de la Nación
y del doctor ERNESTO F. BAVIO, presidente provisional del Honorable Senado

Secretarios: señores ALBERTO H. REALES y SANTIAGO A. JOB

Prosecretario: señor ALBERTO A. GRAZIANO

MINISTRO PRESENTE:

de Hacienda,
Doctor RAMÓN ANTONIO CEREJO

SENADORES PRESENTES:

ANTILLE, Armando G.
AVENDAÑO, Arcadio
BASALDÚA, Juan Carlos
BAVIO, Ernesto F.
BUSQUET, Alfredo
CRUZ, Luis
DURAND, Alberto
HERRERA, Julio
LAZARO, Juan Fernando de
LUCO, Francisco R.
MARTÍNEZ, Ramón Linidor
MATHUS HOYOS, Alejandro
MOLINARI, Diego Luis
RAMELLA, Pablo A.
SAADI, Vicente Leonides
SOLER, Lorenzo (h.)
TANCO, Miguel A.
TASCHERET, Oscar
TEISAIRE, Alberto
VALLEJO, César
ZERDA, Justiniano de la

AUSENTES, CON LICENCIA:

FIGUEIRAS, Demeirio
GÓMEZ HENRIQUEZ, Samuel

AUSENTES, CON AVISO:

AMELOTTI, Osvaldo
ARRIETA, Alfredo J. L.
GÓMEZ DEL JUNCO, Felipe
LORENZÓN, Ricardo Octavio
SOSA LOYOLA, Gilberto

SUMARIO

1.—Asuntos entrados:

I.—Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados.

II.—Comunicaciones particulares.

III.—Despachos de comisiones.

2.—Proyecto de ley del senador Avendaño ampliando la planilla C, ítem 15, con el crédito de \$ 645.000 m/n., a distribuirse entre diversas instituciones de la provincia de Santiago del Estero, para construcciones y obras que quedarán incorporadas al régimen de las leyes 12.576 y 12.815.

3.—Proyecto de ley del senador Martínez incorporando a la planilla C, ítem 9, créditos con destino a sociedades stand de tiro; y a la planilla B, inciso 5º, ítem 9, un crédito de \$ 500.000 m/n. para estudios de obras de defensa en el río Grande, villa Santa Rita, provincia de La Rioja.

4.—Proyecto de ley del senador Teisaire y otros senadores por el que se deroga el artículo 5º de la ley 8.221.

5.—Proyecto de ley del senador Teisaire y otros senadores acordando a la Asociación Biblioteca Sarmiento, de San Carlos de Bariloche un subsidio de \$ 15.000 m/n., por una sola vez.

6.—Proyecto de ley de los senadores Mathus Hoyos y Soler creando el Instituto Superior de Investigaciones Científicas como ente autárquico dependiente directamente del presidente de la Nación Argentina.

- 7.—**Proyecto de ley de los senadores Tascheret y Ramella** por el que se dispone la entrega por el Poder Ejecutivo a la provincia de San Juan de la cantidad de \$ 1.000.000 m/n. para cubrir los gastos de ejecución de la ley 950 de esa provincia.
- 8.—A moción del senador Molinari, se resuelve fijar el día lunes 30 para tratar el despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales sobre intervención a Corrientes.
- 9.—Licencia.
- 10.—Consideración del despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales en el proyecto sobre planificación de obras hidráulicas en Santiago del Estero. Se aprueba.
- 11.—A moción del senador Ramella, se resuelve tratar sobre tablas el despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales sobre la cuestión de privilegio planteada por el senador Durand. Se aprueba.
- 12.—Consideración del proyecto venido en revisión sobre reconstrucción de San Juan. Se aprueba y queda convertido en ley.
- 13.—Consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Finanzas sobre apertura de un crédito de \$ 30.000 m/n. al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para sufragar los gastos que demande la realización de la Asamblea General de Jóvenes de la Acción Católica Argentina. Se aprueba con modificaciones.
- 14.—Consideración del despacho de la Comisión de Legislación General sobre Tribunales del Trabajo. Se aprueba con modificaciones.
- 15.—Consideración del despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales sobre expropiación de terrenos para viviendas económicas. Se aprueba.
- 16.—Consideración del proyecto de presupuesto del Honorable Senado. Se aprueba sobre tablas.
- 17.—Consideración del despacho de las comisiones de Negocios Constitucionales y de Presupuesto, Hacienda y Finanzas sobre expropiación de un local destinado a sede del juzgado federal, sección Santa Fe. Se aprueba.
- 18.—A moción del senador Ramella, se resuelve tratar sobre tablas el despacho de la Comisión de Instrucción Pública sobre equivalencia de títulos otorgados por la Escuela Normal Superior de Córdoba y la Escuela Normal Víctor Mercante, de Villa María, al de maestro normal nacional.
- 19.—Consideración del despacho a que se refiere el número anterior. Se aprueba.
- 20.—Apéndice:

I.—Sanción del Honorable Senado.

II.—Comunicaciones de la Presidencia del Honorable Senado.

—En Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de septiembre de 1946, siendo las 16 y 30, dice el

Sr. Presidente. — Queda abierta la sesión con la presencia de 16 senadores.

1

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

I

Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados

La Honorable Cámara de Diputados comunica que ha dado sanción definitiva al proyecto de ley, en revisión, por el que se aprueba el contrato de adquisición de la United River Plate Telephone Company Limited. (*A sus antecedentes.*)

—Proyecto de ley en revisión sobre erección de un monumento del doctor Lisandro de la Torre, en la ciudad de Rosario. (*A las comisiones de Negocios Constitucionales y de Presupuesto, Hacienda y Finanzas.*)

—Proyecto de ley en revisión por el que se establecen bonificaciones sobre el haber mensual de jubilados y pensionistas de leyes nacionales de previsión. (*A las comisiones de Industria y Comercio, de Legislación General y de Negocios Constitucionales.*)

—Proyecto de ley en revisión por el que se acuerda beneficios y obligaciones a los conductores profesionales de automotores y al servicio de particulares. (*A las comisiones de Trabajo y de Previsión Social.*)

—Proyecto de ley en revisión declarando obligatoria la propaganda de la enseñanza de la higiene en los medios escolares, industriales y civiles, militares y rurales de todo el país. (*A la Comisión de Salud Pública.*)

—Proyecto de ley en revisión sobre amnistía a jefes, oficiales, asimilados e individuos de tropa del ejército, armada y aeronáutica que se encuentren actualmente fuera de esas instituciones a raíz de los sucesos políticos ocurridos desde el 6 de septiembre de 1930. (*A la Comisión de Negocios Constitucionales.*)

Sr. Bavio. — Pido la palabra.

Hago indicación en el sentido de que se recomiende a la comisión respectiva el pronto despacho en el proyecto sobre amnistía, que ha venido en revisión de la Cámara de Diputados, a fin de que pueda quedar convertido en ley en el actual período de sesiones. Podría considerarse en la sesión del próximo lunes.

La amnistía comprende a una gran cantidad de personas, que están en una situación de verdadera injusticia.

—Asentimiento.

Sr. Presidente. — Se hará saber a la comisión.

porque cree que la Nación la necesita, para transferir esa partida a otras obras que el Poder Ejecutivo tenga sumo interés en realizar. Es demasiada elasticidad.

Sr. Ministro de Hacienda. — No, porque se establece la responsabilidad del funcionario.

Sr. Soler. — ¿Y con qué cubre el funcionario esa responsabilidad? ¿Con qué va a pagar el funcionario la transferencia de partida —ya que tenemos la pretensión de tener funcionarios pobres— si a veces éstas pueden sumar millones de pesos?

Sr. Ministro de Hacienda. — Para eso está la Contaduría General de la Nación, que tiene el control financiero de esas cosas.

Sr. Soler. — Estoy de acuerdo con el señor ministro en que el presupuesto debe tener cierta elasticidad, porque no se lo puede inmovilizar al Poder Ejecutivo en un casillero sin que pueda realizar su acción a causa de un artículo que lo traba; pero el señor ministro estará, a su vez, de acuerdo conmigo, en que hay que limitar esa elasticidad, porque, de lo contrario, nos vamos a ir al otro lado, pudiendo llegar a burlarse el espíritu de la ley de la Nación, que es el presupuesto del Estado.

Sr. Durand. — Pido la palabra.

Deseo rectificar brevemente al señor senador por Mendoza.

Yo dije ayer que esos 30.000 pesos se habían gastado. No me interesa saber quién los ha gastado, porque supongo que el Poder Ejecutivo sabe cumplir la ley de contabilidad. Se trata de una simple cuestión de trámites. Si el Poder Ejecutivo los hubiese invertido en pagos, yo tenía entendido que, cumpliendo con la ley de contabilidad, tendría que ser previo un decreto para solicitar a contaduría el anticipo de esos fondos y, más tarde, esos importes al Congreso, por medio de un proyecto de ley o en caso de no haber efectuado los pagos, solicitados previamente al Congreso. Son los dos medios de obtener fondos, en estos casos.

Por mi parte, yo no consideraba necesario pedir mayores informes, porque está claro que el Poder Ejecutivo va a cumplir con la ley de contabilidad. De no hacerlo, la contaduría le hubiese observado y no hubiera dispuesto la entrega de los fondos. Eso es todo lo que puedo decir.

Sr. Presidente (Bavio). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Bavio). — En consideración en particular.

—Se lee el artículo 1º.

Sr. Presidente (Bavio). — Hago notar a la Honorable Cámara que debiera modificarse la

redacción de este artículo. En lugar de decirse «celebrará», debe decir «celebró».

Sr. Durand. — Así es, señor presidente.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Bavio). — Se va a votar el artículo 1º, con esa modificación.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación se vota y aprueba el resto del proyecto.

Sr. Presidente (Bavio). — Queda aprobado el proyecto.

—Se retira del recinto el señor ministro de Hacienda.

14

JUSTICIA DEL TRABAJO

Sr. Presidente (Bavio). — Correspondería que el Honorable Senado entre a considerar el despacho sobre la justicia del trabajo.

—Se lee:

Despacho de comisiones

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Legislación General, de Justicia, de Trabajo y de Negocios Constitucionales, han considerado los antecedentes referentes al fuero del trabajo para la Capital Federal y atentas a la urgencia de perfeccionar su ordenamiento, han procedido a un detenido análisis de las nuevas instituciones creadas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja prestéis vuestra aprobación, como texto definitivo, al siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

CAPÍTULO I

Organización y competencia

Artículo 1º — En la Capital de la República la justicia del trabajo se ejercerá por la Comisión de Conciliación, las de arbitraje, los jueces de primera instancia y la Cámara de Apelaciones. Su organización, competencia y procedimiento se regirán por las normas que la presente ley establece.

Art. 2º — La jurisdicción del trabajo no podrá ser delegada y su competencia es improrrogable.

Art. 3º — Serán de competencia de la jurisdicción del trabajo las causas que se susciten entre empleadores y trabajadores por conflictos de derecho, fundadas en disposiciones de los contratos de trabajo, de empleo, de aprendizaje

o de ajuste de servicio, y todas aquellas otras, contenciosas, en que se ejerciten acciones derivadas de disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo.

Art. 49 — Será competente para conocer en la causa, el juez del lugar del trabajo, el del domicilio del demandado o el del lugar donde se hubiere celebrado el contrato, a elección del demandante.

Art. 59 — La Comisión de Conciliación estará compuesta de un presidente, un vicepresidente y veinte vocales, nombrados por el Poder Ejecutivo, debiendo reunir esos funcionarios las siguientes condiciones: ser argentino nativo, mayor de 25 años, con título de abogado.

Art. 69 — Las comisiones de arbitraje se constituirán, en cada caso, con el presidente o vicepresidente de la Comisión de Conciliación, y con un representante patronal y otro obrero, elegidos por las partes. Actuará como secretario el vocal de la Comisión de Conciliación que el presidente designe.

Art. 79 — Los representantes patronales y obreros deberán reunir las siguientes condiciones: ser argentinos, mayores de 25 años, de notoria buena conducta, saber leer y escribir, ejercer actividad de la misma especialidad que la de las partes y estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.

Art. 89 — Las comisiones de arbitraje entenderán en los casos en que las partes, de común acuerdo, decidieran someter a su resolución los conflictos de derecho motivados por rebaja de la remuneración o modificación de las condiciones de trabajo.

Art. 99 — El Poder Ejecutivo reglamentará el funcionamiento de la Comisión de Conciliación y de las de arbitraje, de acuerdo a las prescripciones de la presente ley.

Art. 10. — Los jueces de primera instancia y los miembros de la Cámara de Apelaciones serán nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, debiendo reunir estos funcionarios para su designación las siguientes condiciones: ser argentino nativo, abogado, mayor de 25 años, haber ejercido en el país durante 4 años su profesión o desempeñado por igual término empleo judicial. Dichos magistrados cesarán automáticamente en sus funciones al cumplir 65 años de edad.

Art. 11. — Los jueces de primera instancia prestarán juramento ante la Cámara de Apelaciones y los miembros de ésta ante su propio seno.

Art. 12. — Los jueces de primera instancia y los miembros de la Cámara de Apelaciones durarán en sus funciones mientras observen buena conducta y sólo podrán ser removidos por las mismas causales establecidas para los

demás magistrados judiciales de la Nación, sobre denuncia formal y escrita de cualquier interesado y en virtud de sentencia fundada de un tribunal compuesto por dos vocales de las cámaras de Apelaciones en lo Civil, un vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial y dos vocales de la Cámara de Apelaciones del Trabajo designados por sorteo. Cuando fuere el denunciado miembro de la Cámara de Apelaciones, el tribunal será presidido por el procurador general de la Nación.

La denuncia deberá ser presentada ante el presidente de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, quien convocará al tribunal correspondiente, el que decidirá sobre la procedencia de la misma.

Art. 13. — De la denuncia se dará vista al acusado por seis días y vencido el término, hubiere o no contestación, se convocará a las partes a una audiencia con intervalo de diez días. Las partes podrán ofrecer pruebas y pedir las medidas necesarias para producir las mismas en la audiencia expresada. El juez acusado podrá ser suspendido desde la presentación de la denuncia.

La sentencia se dictará dentro de los diez días de recibidas las pruebas y, si fuere condenatoria, sólo tendrá por efecto dejar cesante al juez.

Art. 14. — En la Capital de la República habrá treinta jueces de primera instancia. Cada juzgado tendrá un secretario, que deberá reunir las siguientes condiciones: ser argentino nativo, abogado o escribano y mayor de 25 años.

Art. 15. — La Cámara de Apelaciones estará compuesta de un presidente, un vicepresidente y nueve vocales. El presidente y el vicepresidente serán elegidos anualmente por mayoría de votos.

Art. 16. — La Cámara de Apelaciones funcionará dividida en cinco salas. Cada sala estará compuesta por el presidente de la cámara y dos vocales, y hará tribunal con el total de sus miembros, pudiendo actuar con dos en caso de que no hubiere discrepancia.

Art. 17. — La Cámara de Apelaciones se reunirá en pleno para unificar la jurisprudencia cuando cualquiera de las salas entendiera que es conveniente fijar la interpretación de la ley o de la doctrina aplicable.

Art. 18. — La Cámara de Apelaciones tendrá tres secretarios, que deberán reunir las siguientes condiciones: ser argentinos, mayores de 25 años, abogados.

Art. 19. — La Cámara de Apelaciones conocerá:

- a) De los recursos de apelación que se interpongan contra las sentencias de los jueces de primera instancia;

- b) De los recursos de apelación que se interpongan en los casos autorizados por las leyes de previsión social;
- c) De los recursos que autoriza el artículo 6º de la ley 11.570;
- d) De los recursos de queja y retardo de justicia;
- e) De las recusaciones de sus propios miembros y de los jueces de primera instancia;
- f) De los recursos de nulidad interpuestos contra las resoluciones de las comisiones de arbitraje.

Art. 20. — El Ministerio Público del Trabajo será desempeñado por un procurador general del trabajo y 15 representantes.

El procurador general del trabajo y los representantes del ministerio público deberán reunir las mismas condiciones exigidas para los jueces de primera instancia.

Art. 21. — Corresponde al ministerio público en esta jurisdicción:

- a) Representar y defender los intereses fiscales;
- b) Intervenir en todo asunto judicial que interese a la persona o bienes de los menores de edad, dementes y demás incapaces, y entablar en su defensa las acciones o recursos necesarios, sea directa o juntamente con los representantes de aquéllos;
- c) Velar por el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones que deban aplicar los tribunales del trabajo, pidiendo el remedio de los abusos que notare;
- d) Ser parte necesaria en todas las causas del trabajo y en las contiendas de jurisdicción y competencia;
- e) Representar a la caja de garantía creada por la ley 9.688, en todas las jurisdicciones.

Art. 22. — El Ministerio de Justicia e Instrucción Pública organizará el Ministerio Público del Trabajo y dictará las normas reglamentarias con sujeción a las cuales deberá ejercer sus funciones.

Art. 23. — Los miembros de la Cámara de Apelaciones y los jueces de primera instancia no podrán ser recusados sin causa, y regirán para los mismos las causales de incompatibilidad, excusación y recusación establecidas para los magistrados del fuero ordinario de la Capital Federal.

Art. 24. — En los casos de recusación, licencia u otro impedimento, los jueces se reemplazarán recíprocamente en la forma que establezca la Cámara de Apelaciones.

Art. 25. — En caso de licencia u otro impedimento, los secretarios serán reemplazados por otro empleado del Tribunal del Trabajo, que deberá reunir las condiciones exigidas para el titular.

Art. 26. — La Cámara de Apelaciones llevará un registro de peritos y establecerá las condiciones y requisitos que deberán reunir a los efectos de su inscripción. Los nombramientos de oficio deberán recaer en los peritos inscritos, quienes no podrán, sin justa causa, dejar de aceptar el cargo, bajo pena de exclusión del registro.

Art. 27. — El Poder Ejecutivo formará una lista de expertos, patronales y obreros, de cada una de las actividades a que se refiere el decreto del Poder Ejecutivo 16.116, de fecha 16 de enero de 1933.

Art. 28. — Los expertos que se designen deberán aceptar el cargo, haciéndose pasibles, en caso de negativa infundada, de una multa de veinte a cien pesos, que impondrá el juez. No percibirán honorarios por su actuación, pudiendo el juez determinar, según los casos, una suma compensatoria de los salarios dejados de percibir como consecuencia de su desempeño.

Art. 29. — Los miembros de la Cámara de Apelaciones, jueces de primera instancia, vocales de la Comisión de Conciliación y secretarios, no podrán desempeñar ningún otro empleo público o privado, ni ejercer su profesión.

Art. 30. — Las prohibiciones consignadas en el artículo anterior regirán para los empleados de la Cámara de Apelaciones y juzgados de primera instancia.

Art. 31. — La Cámara de Apelaciones nombrará sus secretarios y demás personal.

Los secretarios y empleados de los juzgados de primera instancia serán nombrados por la Cámara de Apelaciones a propuesta de los jueces respectivos.

Art. 32. — La Cámara de Apelaciones ejercerá superintendencia sobre los jueces de primera instancia y demás funcionarios y empleados judiciales.

CAPÍTULO II

Procedimiento general

Art. 33. — El procedimiento será impulsado de oficio por los jueces.

Art. 34. — Todos los términos serán improrrogables y perentorios; correrán desde el día siguiente al del emplazamiento, citación o notificación. No se contarán los días inhábiles.

Art. 35. — Ante los jueces y Cámara de Apelaciones las partes podrán ser representadas de acuerdo con las disposiciones establecidas en la ley 10.996.

Exista o no representación, la asistencia letrada será obligatoria ante la Cámara de Apelaciones.

Ante la Comisión de Conciliación y las de arbitraje, las partes deberán comparecer personalmente, pudiendo en caso de impedimento ser representadas:

- a) Por parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad;
- b) Tratándose de empleados u obreros, por compañeros de trabajo;
- c) Tratándose de asociaciones, sociedades o empresas, la representación podrá ser ejercida por sus directores, asociados, gerentes o empleados superiores con poder suficiente.

Art. 36. — La representación en juicio podrá ejercerse por carta poder que se otorgará ante el presidente de la Comisión de Conciliación o secretario de juzgado de primera instancia, previa justificación de la identidad del interesado y deberá ser firmada por el funcionario y el otorgante. En caso de impedimento podrá firmar cualquier persona hábil a ruego del otorgante.

Art. 37. — Los menores adultos podrán estar en juicio de acuerdo a lo prescrito en los artículos 281 y 283 del Código Civil, y podrán otorgar mandato en la forma establecida en el artículo anterior previa autorización del Ministerio Público del Trabajo.

Art. 38. — Toda persona que actúe en la jurisdicción del trabajo deberá, en su primera presentación, constituir domicilio legal dentro del límite de la Capital Federal, en el que se practicarán todas las diligencias que se ordenen. El domicilio así constituido será válido para todos los efectos legales mientras no sea substituido.

Art. 39. — Las sentencias y las citaciones a las audiencias de conciliación y de prueba se notificarán por despacho telegráfico que podrá ser colacionado y en la notificación de la sentencia se transcribirá solamente la parte dispositiva. Las demás resoluciones serán notificadas por nota.

Art. 40. — Las providencias quedarán notificadas por nota al subsiguiente día hábil de ser dictadas. En el primer decreto de trámite se fijarán los días de notificación en el juicio respectivo.

Art. 41. — Las partes actuarán en papel simple.

Quando el empleador sea condenado en costas deberá reponer todas las actuaciones. Si se declararan las costas por su orden repondrá la de su parte.

Los trabajadores y sus derechohabientes, estarán exentos de reponer el sellado.

Art. 42. — Los jueces darán audiencia pública diariamente durante seis horas, con excepción de los sábados, que lo harán durante tres horas.

Art. 43. — Las actuaciones judiciales deberán practicarse en días y horas hábiles, siendo facultad del juez habilitar a ese efecto días y horas cuando lo considere necesario.

Art. 44. — Las audiencias comenzarán a la hora designada, no teniendo los citados obligación de esperar sino media hora.

Art. 45. — En caso de muerte, incapacidad, quiebra o concurso del demandado, las acciones que sean de competencia de la jurisdicción del trabajo se iniciarán o continuarán en esta jurisdicción, a cuyo efecto deberán citarse o notificarse a los respectivos representantes legales.

CAPÍTULO III

Procedimiento ante la Comisión de Conciliación

Art. 46. — Toda divergencia que diera origen a la jurisdicción de los tribunales del trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la presente ley, deberá ser sometida previamente a la Comisión de Conciliación.

Art. 47. — Planteada una cuestión por parte interesada, se labrará un acta, en la que se consignará:

- a) Nombre, apellido y domicilio del actor y del demandado;
- b) Los hechos y el derecho en que se funda;
- c) El objeto de la demanda.

Art. 48. — Las partes serán citadas para concurrir a una audiencia que se celebrará dentro de los cinco días, en la cual se expondrán las pretensiones de aquéllas y se recibirán los elementos de juicio que hagan a la demostración del derecho de las mismas.

Art. 49. — La Comisión de Conciliación ilustrará a las partes sobre el alcance del procedimiento conciliatorio y propondrá una fórmula de solución.

Art. 50. — Cuando el derecho del trabajador surja de hechos reconocidos por el patrono, no podrá proponerse a las partes soluciones transaccionales.

Art. 51. — Oídas las partes, el conciliador en el mismo acto dictará la resolución administrativa que corresponda, de la cual se expedirá copia a las partes, si así lo solicitaren.

Art. 52. — Los acuerdos conciliatorios o transaccionales celebrados por las partes ante la Comisión de Conciliación pasarán en autoridad de cosa juzgada y, en caso de incumplimiento, se seguirá el procedimiento señalado para la ejecución de sentencia.

Procedimiento arbitral

Art. 53. — Si las partes, en los casos previstos por el artículo 89, optasen por el procedimiento arbitral, lo manifestarán en la audiencia de conciliación, subscribiendo en el mismo acto el respectivo compromiso de arbitraje en el que se establecerá la cuestión o cuestiones que se someten, señalándose la audiencia de prueba que deberá celebrarse dentro de los diez días.

Art. 54. — Serán condiciones esenciales del compromiso a las que deberán someterse las partes:

- a) Que el trabajador deba continuar en el desempeño de sus tareas aceptando provisionalmente las condiciones impuestas;
- b) Que si la modificación se declarare arbitraria o la rebaja injustificada, el empleador deje sin efecto la modificación o rebaja a partir de la notificación del fallo, reintegrando al trabajador el importe de los salarios que hubiere dejado de percibir como consecuencia de la modificación o rebaja;
- c) Que si la modificación o rebaja es justificada, el trabajador deberá aceptar las nuevas condiciones.

Art. 55. — Dentro de los tres días de realizada la audiencia de conciliación se designarán los representantes a que se refiere el artículo 69 mediante presentación escrita donde conste la conformidad de los mismos para el desempeño del cargo, y a quienes se tendrá por nombrados previo juramento y justificación de las condiciones requeridas para su desempeño, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 79 y concordantes. Si las partes no propusieran a sus respectivos representantes en el término expresado, la comisión procederá a nombrarlos de oficio, designándolos de la nómina de expertos a que se refiere el artículo 27.

Pruebas

Art. 56. — Las partes ofrecerán las pruebas de que intenten valerse dentro del mismo término fijado en el artículo 67.

En todos los casos la totalidad de la prueba deberá ser substanciada en la audiencia respectiva e incumbe a las partes adoptar las medidas necesarias para ello. En caso contrario perderán el derecho de hacer uso de las mismas.

Art. 57. — Los miembros de la comisión nombrados por las partes o de oficio, podrán ser recusados dentro del día subsiguiente hábil al de su nombramiento, ante la misma comisión. Son casos de recusación:

- a) Tener interés directo en el asunto;
- b) Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, con alguna de las partes;

- c) Tener enemistad manifiesta con alguna de las partes por hecho determinado.

La excusación deberá fundarse en las mismas causales.

Art. 58. — La comisión, con exclusión del miembro recusado, resolverá sin más trámite sobre la recusación interpuesta, siendo inapelable su resolución.

Art. 59. — Excluido un representante por excusación o recusación, la parte que lo propuso deberá designar reemplazante dentro de las veinticuatro horas en la forma establecida en el artículo 55.

Art. 60. — El presidente y el secretario de la Comisión de Arbitraje podrán ser recusados por las mismas causales que los jueces de primera instancia.

Art. 61. — La comisión arbitral procederá sin sujetarse a las formas ordinarias del juicio, limitándose a recibir las pruebas que ofrezcan las partes, en la medida que lo estime necesario para la comprobación de los hechos.

Art. 62. — La comisión se constituirá el día y hora designados para la audiencia de prueba con la totalidad de sus miembros.

Art. 63. — Los representantes designados a propuesta de las partes o de oficio, que dejaren de concurrir sin justa causa a la constitución del tribunal, se harán pasibles de una multa de veinte a cien pesos moneda nacional, que aplicará el presidente.

Art. 64. — Producida la prueba, la comisión dictará resolución dentro de un plazo que no exceda de dos días.

La resolución se limitará a expresar si la modificación impuesta está dentro de las facultades patronales o si la rebaja de la remuneración es o no justificada.

Art. 65. — Contra la resolución de la Comisión de Arbitraje no habrá otro recurso que el de nulidad, que no podrá fundarse sino en haberse resuelto sobre puntos no sometidos a su decisión y en haberlo hecho fuera del término legal.

El recurso se interpondrá dentro del tercer día de la notificación ante la Comisión de Arbitraje, la que elevará las actuaciones a la Cámara de Apelaciones, que resolverá sin más trámite.

Art. 66. — El compromiso cesa en sus efectos por voluntad unánime de los que lo contrajeron.

CAPÍTULO IV

Procedimiento judicial

Art. 67. — En caso de no tenerse una solución conciliatoria, la parte interesada podrá promover la acción que corresponda ante el juez del fuero del trabajo, acompañando la copia a que se refiere el artículo 51. La demanda deberá ser contestada por escrito dentro del término de

cinco días. Dentro del término de tres días de contestada la demanda, las partes ofrecerán la prueba por escrito.

Art. 68. — Procede la acumulación objetiva y subjetiva de acciones activa y pasiva, siempre que las acciones no sean contrarias entre sí y que por la materia y las personas sea competente el mismo juez.

Art. 69. — Sólo son admisibles como excepciones, la incompetencia de jurisdicción, la falta de personería de las partes o sus representantes, la litispendencia en otro juzgado o tribunal competente, la cosa juzgada, la transacción y la prescripción.

Art. 70. — Al contestar la demanda deberán oponerse las excepciones. Estas deberán contestarse dentro de dos días. La prueba deberá ofrecerse dentro del término de tres días.

Art. 71. — El juez, antes de recibir la prueba que haga a lo principal, examinará la de las excepciones, resolviendo acto continuo sobre su aceptación o rechazo. La decisión será apelable dentro del término de dos días.

Art. 72. — El juez fijará la audiencia o audiencias en las que se recibirán las pruebas, lo que se verificará en un plazo máximo de diez días.

Art. 73. — Se aceptarán como medios de prueba, los instrumentos, las informaciones o declaraciones de testigos, los dictámenes de peritos, la inspección ocular, la confesión y las presunciones o indicios.

Art. 74. — Si el demandado, debidamente citado, no contestare la demanda, se presumirá como ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos alegados por el actor.

Art. 75. — El juez estudiará la procedencia de las medidas de prueba ofrecidas por las partes, pudiendo denegar su producción mediante resolución fundada. Las pruebas rechazadas podrán ser nuevamente ofrecidas en segunda instancia al producir el informe a que se refiere el artículo 106, debiendo la cámara estudiar en dicha oportunidad la procedencia de las mismas.

Art. 76. — Cuando el juez estimare improcedente alguna medida de prueba ofrecida por las partes, podrá denegar su producción mediante resolución fundada, la que será apelable juntamente con la sentencia en los casos en que el recurso sea procedente contra ésta.

Art. 77. — Cuando se trate de sociedades anónimas podrán absolver posiciones, además de sus representantes legales, los directores o gerentes con mandato suficiente.

Art. 78. — En las audiencias de prueba las partes podrán ser asistidas por letrado.

Art. 79. — El juez interrogará personalmente a las partes bajo pena de nulidad y sólo hará constar en el acta las declaraciones que sean pertinentes.

Art. 80. — Si las partes interrogadas por el juez respecto de hechos que les son personales, adujeren ignorancia, contestaren en forma evasiva o se negaren a contestar, podrá estimarse esa actitud como una presunción a favor de los hechos alegados por la contraparte, en cuanto se relacionen con el contenido de la pregunta.

Art. 81. — El juez, cuando lo considere necesario, podrá requerir el asesoramiento de peritos, pudiendo disponer su concurrencia a la audiencia de prueba.

Art. 82. — Podrán ser testigos todas las personas mayores de catorce años. Su número no podrá exceder de cuatro por parte.

Si la naturaleza del juicio lo justificare, podrá admitirse un mayor número de testigos.

Art. 83. — Los testigos serán citados por intermedio de la autoridad policial haciéndoles conocer las penalidades de que se harán pasibles en el caso de no comparecer sin justa causa. Si no comparecieren, se designará nueva audiencia, la que se celebrará dentro de los tres días siguientes, disponiéndose su comparecencia por la fuerza pública. No habiendo justificado su inasistencia, se harán pasibles de una multa que impondrá el juez, la que no podrá exceder de cien pesos en cada caso.

Art. 84. — No podrán ser presentados como testigos contra una de las partes, sus consanguíneos o afines en línea directa, ni el cónyuge aunque estén separados legalmente.

Art. 85. — El juez examinará a los testigos previo juramento de decir verdad, haciéndoles saber las disposiciones contenidas en el Código Penal sobre falso testimonio. Deberán dar razón de sus dichos y si no lo hicieren, el juez lo exigirá.

Art. 86. — El juez podrá, a petición de parte o de oficio, proceder al careo de los testigos.

Art. 87. — Si la declaración del testigo ofreciere indicios graves de falso testimonio o de soborno, el juez podrá decretar de inmediato su detención, poniéndolo a disposición del juez del crimen, con remisión de los testimonios que estime pertinentes.

Art. 88. — Las partes podrán tachar a los testigos por motivo fundado de inhabilidad o fundado en hechos que hicieren presumir la parcialidad de su declaración y el juez, al dictar sentencia, apreciará el valor de las mismas.

La prueba de las tachas deberá producirse dentro de los dos días de deducidas.

Art. 89. — Las partes deberán agregar toda la prueba instrumental de que intenten valerse, dentro del término a que se refiere el artículo 70; no teniéndola a su disposición, la mencionarán con la individualidad posible dentro de ese término, expresando lo que de ella resulte y designando el lugar en que se encuentre.

Art. 90. — Todo aquel contra quien se presente en juicio un documento privado que se le

atribuya, está obligado a declarar si es o no suya la firma.

Negada su autenticidad, si la parte que lo ha presentado insiste en su validez, se procederá al examen pericial.

Art. 91. — Cuando el juez lo crea necesario, podrá trasladarse al lugar del trabajo a fin de comprobar de visu las circunstancias que considere apreciables como elementos de juicio.

Art. 92. — Cuando la comprobación de los hechos controvertidos requiera conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o industria, se procederá al nombramiento de peritos.

Art. 93. — Los peritos serán nombrados por acuerdo de partes o de oficio en caso de que ello no ocurra, pudiendo su número variar de uno a tres, a juicio del magistrado y de acuerdo con la índole o monto del asunto objeto de la pericia.

Art. 94. — Los peritos podrán ser recusados hasta dos días después de su nombramiento por las causas establecidas para los jueces.

Art. 95. — El juez podrá disponer, cuando lo considere necesario, que las pericias se practiquen por profesionales o técnicos dependientes de la administración nacional.

Art. 96. — Vencido el término a que se refiere el artículo 72, se certificará por el secretario, pudiendo las partes dentro de los tres días presentar un alegato sobre el mérito de la prueba. Acto continuo, queda el juez habilitado para dictar sentencia, debiendo hacerlo dentro del término de cinco días.

Art. 97. — La sentencia deberá declarar el derecho de los litigantes condenando o absolviendo en todo o en parte, debiendo fundarse en el texto de la ley y, a falta de éste, en los principios de leyes análogas y, en defecto de éstos, en los principios generales del derecho. Supliendo la omisión del demandante, el juez estará facultado para sentenciar *ultra petita*.

Art. 98. — La sentencia condenatoria determinará el plazo dentro del cual deberá procederse a su cumplimiento.

Art. 99. — La sentencia condenatoria traerá aparejada, aunque no se solicitare, la imposición de costas a la parte vencida.

El juez podrá eximir, en el todo o en parte, de esa responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello.

Art. 100. — En los casos en que la iniciación y prosecución del juicio se haya debido a la negativa injustificada del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones, el juez podrá fijar una indemnización compensatoria de los perjuicios ocasionados al acreedor por la demora en la percepción de sus haberes o en el goce de sus beneficios.

En ningún caso esa indemnización podrá ser superior a un veinte por ciento del monto de la condena.

Art. 101. — Los honorarios pertenecen a los profesionales a favor de quienes han sido regulados, quienes podrán ejecutarlos directamente de la parte vencida.

Art. 102. — El juez, de oficio o si lo pidiera alguna de las partes, dentro del siguiente día hábil al de la notificación de la sentencia podrá corregir cualquier error material, aclarar algún concepto obscuro sin alterar lo substancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio.

Art. 103. — La sentencia y toda otra resolución que recaiga en asuntos en que el monto cuestionado no sea superior a quinientos pesos, serán inapelables. Cuando el monto sea superior a esa suma podrá apelarse de la sentencia definitiva y de las resoluciones por las que se decida la procedencia o improcedencia de las excepciones.

El Ministerio Público del Trabajo, cualquiera sea el monto del juicio y en atención a la importancia de la cuestión de derecho debatida, podrá interponer recurso de apelación contra la sentencia y las resoluciones que decidan excepciones.

Art. 104. — El recurso de apelación deberá interponerse dentro de los dos días de notificada la sentencia o producida la aclaración.

Art. 105. — Entablado el recurso de apelación, el juez elevará los autos al superior en el plazo de veinticuatro horas.

Art. 106. — Recibido el expediente, el presidente de sala dictará la providencia de autos y las partes, en el término de diez días, podrán informar sobre el recurso en relación.

Art. 107. — La Cámara podrá decretar de oficio medidas para mejor proveer y dictará sentencia en el plazo no mayor de diez días después de producidos los informes a que se refiere el artículo anterior.

Art. 108. — La sentencia será extendida en las actuaciones, dejándose copia en el libro destinado al efecto.

Art. 109. — Las resoluciones de la cámara serán pronunciadas a mayoría absoluta de votos de los miembros de las salas que deban entender.

Art. 110. — Las sentencias serán notificadas a las partes en la forma prescrita por el artículo 39.

Art. 111. — Consentida o ejecutoriada la resolución de la cámara, se devolverán sin más trámite las actuaciones al juzgado de origen.

Art. 112. — Recibidos los autos en el juzgado de origen, el secretario practicará la liquidación correspondiente y se intimará el pago al deudor mediante despacho teleográfico.

No efectuado el pago dentro de los dos días, se trabará embargo en bienes del deudor, de-

cretándose la venta de los mismos por el martillero que el juez designe, procediéndose en lo sucesivo de acuerdo con lo que establecen los artículos 509 y siguientes del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Capital Federal.

Recurso de hecho

Art. 113. — El recurso de hecho deberá deducirse por escrito ante la Cámara de Apelaciones y su interposición no suspenderá la tramitación del juicio mientras el expediente no se eleve al superior, quien podrá retenerlo sólo durante cuarenta y ocho horas. Podrá fundarse en retardo de justicia o en el rechazo del recurso de apelación.

Art. 114. — Cualquiera de las partes podrá solicitar por escrito que el juez dicte sentencia cuando hubiere transcurrido el término a que se refiere el artículo 96. Si vencido el término de dos días de su presentación no se hubiere dictado sentencia, se podrá presentar en queja ante la Cámara de Apelaciones acompañando copia simple del expresado escrito. Si la cámara lo considera procedente, dispondrá que el juez administre justicia dentro del término de dos días. Si el magistrado desobedeciere la orden incurrirá en una multa de cien pesos, que impondrá la cámara a favor del Consejo Nacional de Educación, pasándose los autos al juez que le sigue en orden de turno.

Art. 115. — Cuando el recurso se deduzca por apelación denegada, deberá interponerse dentro de dos días y acompañarse copia simple de la providencia recurrida. La cámara dispondrá la elevación de los autos y declarará bien o mal denegado el recurso.

Medidas precautorias

Art. 116. — Podrá decretarse, a petición de parte, embargo preventivo sobre los bienes del deudor:

- a) Cuando se justifique sumariamente que el deudor trata de enajenar, ocultar o transportar bienes o que, por cualquier causa se hubiere disminuído notablemente su responsabilidad, en forma que perjudique los intereses del acreedor y siempre que el derecho del peticionante surja verosímelmente de los extremos probados;
- b) Cuando exista sentencia favorable o confesión expresa o ficta de hechos que hagan presumir el derecho alegado;
- c) Que la existencia del crédito esté justificada con instrumento público o privado atribuído al deudor, reconocida la firma por dos testigos.

Art. 117. — En todos los casos en que, habiendo lugar a embargo preventivo o definitivo,

éste no pudiera hacerse efectivo por no conocerse bienes del deudor, podrá solicitarse contra él inhibición general para vender o gravar sus bienes.

Art. 118. — Cuando cualquier acto de disposición u ocultamiento de bienes, por parte del empleador, pudiera comprometer la efectividad de los derechos concedidos por las leyes del trabajo, el ministerio público, si lo estimare conveniente, podrá solicitar las medidas precautorias a que se refieren los artículos 116 y 117.

CAPÍTULO V

Disposiciones generales

Art. 119. — En cualquier estado del procedimiento se intentará avenir a las partes, mediante soluciones conciliatorias.

Art. 120. — Las autoridades judiciales y administrativas que integren el fuero del trabajo en el ejercicio de sus funciones, podrán imponer apercibimientos y multas hasta de cincuenta pesos moneda nacional y arrestos de veinticuatro horas, que podrán aumentarse hasta cuarenta y ocho horas en el caso de reincidencia, por las faltas que se cometieren en las audiencias y demás procedimientos, al respeto y consideración que les son debidos. Las medidas disciplinarias aplicadas por las comisiones de conciliación y arbitraje serán apelables ante el juez de primera instancia, y las dispuestas por éste, ante la cámara.

El recurso de apelación deberá ser interpuesto dentro de las veinticuatro horas.

Art. 121. — Sin perjuicio de las penalidades establecidas en la presente ley, la Cámara de Apelaciones, los jueces, la Comisión de Conciliación y las de arbitraje, podrán imponer multas de diez a cien pesos a toda persona que, debidamente citada, no compareciera sin causa justificada.

Art. 122. — Las multas que se impongan en virtud de lo dispuesto en la presente ley, deberán ser satisfechas dentro de las cuarenta y ocho horas de su notificación y en caso de no hacerse efectivas se procederá de conformidad con lo que establece el artículo 10 de la ley 11.570.

Art. 123. — La Comisión de Conciliación dependerá de la Secretaría de Trabajo y Previsión, y sus miembros serán nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta de la misma. El Ministerio Público del Trabajo dependerá del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, y sus miembros serán designados por el Poder Ejecutivo.

Art. 124. — La superintendencia a que se refiere el artículo 32 será ejercida por la Cámara de Apelaciones de acuerdo con lo que dispone el artículo 103 de la ley de organización de los tribunales de la Capital Federal.

Art. 125. — El procedimiento conciliatorio y arbitral se actuará en papel simple.

En el procedimiento judicial la reposición deberá hacerse de acuerdo con lo que al respecto establezca la ley de sellos.

Los compromisos arbitrales, así como los convenios resultantes de las soluciones conciliatorias no estarán sujetos a gravamen fiscal.

Art. 126. — Los apoderados y letrados de la Secretaría de Trabajo y Previsión, cuando ejerzan la representación y patrocinio de empleados y obreros, podrán firmar sin estampilla fiscal, con cargo de reposición en el supuesto de percibir honorarios de los patronos demandados en virtud de condenación con costas.

Art. 127. — Los empleadores no podrán deducir suma alguna de los sueldos o salarios de sus empleados u obreros cuando éstos se vean obligados a faltar o interrumpir sus tareas por citaciones de las autoridades del fuero especial del trabajo; en caso contrario, se harán pasibles de las sanciones previstas en el artículo 99 de la ley 11.278.

Art. 128. — En las cuestiones de competencia que se susciten se procederá en la forma prescrita en el título X del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Capital Federal.

Art. 129. — Los hechos en que se fundamen-ten las demandas que se deduzcan ante la jurisdicción del trabajo, y que hayan dado lugar a resoluciones administrativas condenatorias de la Secretaría de Trabajo y Previsión en uso de sus facultades, tendrán presunción de ser ciertas, salvo prueba en contrario.

Art. 130. — Las acciones derivadas de la ley 9.688 se tramitarán de acuerdo con el procedimiento que establece el decreto 21.425, actuando como tribunal de apelación, en la Capital Federal, la Cámara de Apelaciones de la jurisdicción del trabajo.

Art. 131. — Quedan derogadas las disposiciones de la ley 12.713 en cuanto encomiendan a las comisiones de conciliación y arbitraje de la Capital Federal la substanciación y resolución de las cuestiones comprendidas en el artículo 32 de la misma.

Art. 132. — Hasta tanto se fijen en la ley general de presupuesto los sueldos del personal en el fuero del trabajo, éstos serán los siguientes y se pagarán de rentas generales con imputación a la presente ley:

Cámara de Apelaciones

	\$ m/n. al mes
Vocal	1.800
Secretario	1.000
Procurador general	1.600

Juzgados de primera instancia

	\$ m/n. al mes
Juez	1.500
Secretario	900
Representante del ministerio público	1.000

Personal administrativo y técnico-profesional

Oficial mayor	700
Habilitado	700
Oficial 1º	600
Oficial de justicia	500
Auxiliar	450
Escribiente	300

Maestranza

Mayordomo	275
Ordenanza	200

Juzgados

Auxiliar mayor	500
Auxiliar principal	450
Auxiliar	350
Escribiente	300
Ordenanza	200

Comisión de Conciliación

Presidente	1.100
Vicepresidente	1.000
Vocal	700
Secretario	700

Personal administrativo y técnico-profesional

Auxiliar mayor	500
Auxiliar principal	450
Auxiliar	350
Escribiente	300
Ordenanza	200

CAPÍTULO VI

Disposiciones transitorias

Art. 133. — Los juicios actualmente en trámite en otras jurisdicciones que sean de competencia de la que se crea por la presente ley, quedarán radicados en los tribunales de origen hasta su terminación.

Art. 134. — La Cámara de Apelaciones tendrá un oficial mayor, cinco oficiales primeros,

un habilitado, cinco auxiliares, diez escribientes, un mayordomo y cinco ordenanzas.

Cada juzgado tendrá un auxiliar mayor, un auxiliar principal, un auxiliar, dos escribientes y un ordenanza.

Habrán cinco oficiales de justicia, que dependerán de la Cámara.

Art. 135. — Los funcionarios actualmente en ejercicio que no tuvieran el título requerido por esta ley para el desempeño de su cargo, continuarán en el mismo. Los que teniendo título requerido, pero necesiten acuerdo del Senado, serán confirmados una vez llenado este requisito.

Art. 136. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Art. 137. — Comuníquese, etc.

Armando G. Antille. — Julio Herrera. — Diego Luis Molinari. — Alejandro Mathus Hoyos. — Miguel A. Tanco. — Francisco R. Luco. — César Vallejo. — Pablo A. Ramella. — Luis Cruz.

Sr. Presidente (Bavio). — Está en consideración en general.

Sr. Antille. — Pido la palabra.

Deseo significar a mis honorables colegas que este proyecto de creación de la justicia del trabajo ha sido confeccionado por la comisión con la presencia casi permanente del señor ministro de Justicia e Instrucción Pública, y hecho en base al proyecto de ley fundado en el decreto del gobierno defacto, con acopio de diversos antecedentes doctrinarios. La comisión aceptó casi las dos terceras partes de los artículos, porque no concurrió el señor ministro a la última de las reuniones de la comisión que hizo el estudio pertinente.

En la fecha, el señor ministro ha enviado a la Comisión de Legislación General un mensaje, pidiendo que se le excuse de presentarse al Honorable Senado, pero dando, sin embargo, verbalmente y por nota, las explicaciones que se le solicitaron, a fin de establecer si este proyecto de ley, que simplemente, según el artículo 99, rige para la capital de la República, sería en adelante extendido a las provincias y también a los territorios nacionales.

El señor ministro informó que, con respecto a las provincias, está ya en trámite una solicitud a las mismas para convenir tratados de justicia que se refieran especialmente al fuero del trabajo; y en cuanto a los territorios, se propone la creación de algunos jueces en los territorios nacionales, agrupados en forma de que una Cámara de Apelaciones que se establezca en Resistencia, tenga jurisdicción en el Chaco, Formosa y Misiones, y otra en Viedma, con jurisdicción en los demás territorios nacionales, que serían los de Santa Cruz, Río Negro,

Chubut, La Pampa, Neuquén y Tierra del Fuego. De manera que se agrupan los territorios en forma de que, con dos cámaras, pueda tener la jurisdicción en los mismos. Diversos jueces atenderán en cada territorio los conflictos del trabajo.

Como se puede ver fácilmente en el articulado, esta justicia tiende a dirimir los conflictos que, con motivo del trabajo, puedan suscitarse entre patronos, trabajadores y obreros, y comprende también las leyes vinculadas a la misma materia, como ser accidentes del trabajo, despidos, pagos de salarios, etcétera.

La forma como la ley organiza la justicia, consiste, de acuerdo con lo que se aplica actualmente en la Capital Federal, en la creación de comisiones de conciliación y de arbitraje, y de jueces de derecho o jueces letrados que la misma ley faculta a crear al Poder Ejecutivo.

El trámite es, en general, el que se ha seguido hasta ahora en la aplicación del decreto sobre justicia del trabajo en la Capital Federal y se establece también en el proyecto una forma de regular el procedimiento arbitral así como el trámite en la Comisión de Conciliación. En lo demás, son las reglas generales que más o menos se aceptan y que en general rigen los juicios ordinarios en lo civil.

Este informe, que tiene que ser breve para que el Senado entre ya a votar la ley, entiendo que será suficiente para que se comprenda el espíritu de la legislación que ahora se va a aplicar y que es, simplemente, una modificación, en parte, del decreto que está ya rigiendo en la Capital Federal.

Sr. Herrera. — Pido la palabra.

Por las razones que acaba de dar el señor miembro informante de la Comisión de Legislación General y por las que me propongo agregar en seguida, apoyaré en general con mi voto el proyecto de ley que está a consideración del Honorable Senado.

El despacho de la Comisión de Legislación General que consideramos, innova el decreto 32.347, que creó el fuero del trabajo y así se explica que, sin esperar que la Honorable Cámara de Diputados preste su sanción al proyecto ya despachado por el Honorable Senado, entremos a considerar, desde ya, esta nueva ley, que encara no una reforma, sino una nueva legislación sobre materia tan importante.

Vivimos, señor presidente, una era de transformaciones sociales que dan el sello característico de su naturaleza jurídica y sociológica al mundo contemporáneo. Si hablamos hoy de revolución social es porque éste es el tema candente del momento, es la verdad que recogemos de la calle, con todo su valor subjetivo y humano, y es la esencia misma de la realidad.

A la revolución hoy la conocemos en la conciencia que las masas han adquirido de su propio valer. El obrero de hoy conoce el enorme

poder que representa en la vida social contemporánea. Es el despertar de una clase que, de por sí, constituye el factor más poderoso en la economía de las naciones.

No es un fenómeno sociológico específico a tal o cual país, sino que adquiere contornos mundiales, universalizando sus normas y generalizando sus métodos.

Ante la inmensa realidad contemporánea, ¡cuán distantes nos parecen épocas recientes, cuando aun se miraba al obrero con el concepto frío y egoísta del individualismo! *Operarium servorumque turba* les llamaban los romanos, pensando que como siervos que eran debían permanecer junto al esclavo, aborrecidos e indefensos, frente a las castas corrompidas por el sensualismo y el poder.

¡Cuánto dolor y sangre ha costado a la clase trabajadora la conquista de sus derechos! ¡Cuántos sacrificios estériles, cuánta tristeza y amargura, le hicieron concebir, en un mundo de fe, la más cruel desesperanza! ¡Cuánto heroísmo mancillado por la indiferencia culpable de los unos, y el desprecio criminal de los otros! En fin, ¡qué lucha sorda y tenaz contra los poderosos que no concibieron en el mundo la existencia de una igualdad fundada en los más altos destinos humanos y nimbada de luz por los más bellos atributos divinos!

Hoy nuestra sociedad se encuentra impregnada de justicia social y nuestro país puede gloriarse de ser uno de los más adelantados en la materia. Pero esto no basta; la obra renovadora del 4 de junio es sólo un jalón en el largo camino que debemos recorrer, y es por ello que se ha dicho, con toda razón, que la revolución recién ha comenzado.

La crisis del individualismo ha sido provocada por el intervencionismo del Estado, triunfante hoy y en vías de encauzarse definitivamente en el mundo del mañana. Pero creo un deber, señor presidente, señalar con exactitud la naturaleza filosófica de nuestro intervencionismo, porque no deseo que se le confunda con corrientes sociales y políticas, exóticas a nuestro medio y contrarias a la naturaleza de la humanidad.

Los poderes del Estado —identificado y consubstanciado con la colectividad que representa—, igualmente distante de la inoperante concepción «manchesteriana», como de la destructora absorción totalitaria, se ejercen para restablecer la salud económica de los pueblos, para nivelar desigualdades creadas artificialmente y para morigerar los impulsos egoístas o las pasiones antisociales.

Su actividad tiende a regular los factores que intervienen en el desarrollo de la comunidad, para evitar el caos, proscribir la injusticia e incrementar el progreso; su *imperium* se emplea para impedir el abuso, para proteger a los débiles y para salvar el equilibrio social. Res-

peta a la entidad humana siempre que ella, a su vez, no atente o conspire contra los fines superiores de la colectividad.

La función tuitiva del Estado moderno pretende cohibir el desenfreno de los individuos para salvaguardar el acervo común; normar las actividades particulares para encauzarlas por derroteros benéficos para el país y tutelar a las clases más desfavorecidas para elevar el standard físico y moral de la población.

Para la consecución de estos fines, es necesario que la libertad de cada uno no moleste, ni perturbe, ni coarte la libertad de los demás y que ejerza para objetos de utilidad general o de interés común. Este aspecto regulador de la alta misión del Estado, es contrario tanto al liberalismo, que dejaba a la sociedad indefensa e inerme en manos de la codicia o el poderío de grupos o castas privilegiadas como el totalitarismo, que anula al hombre, lo absorbe y lo brutaliza someténdole a los férreos cartabones que dicta la voluntad del tirano.

Es por ello que detestamos al marxismo con su sentido materialista de la vida y es por ello también que, haciendo un culto del espíritu, concebimos al hombre como fin en el juego de valores que representa su posición frente al Estado.

Porque no vemos al hombre como un medio destinado a servir intereses de castas que gobiernan en nombre del todo, porque hemos reconocido los altos valores del espíritu y no nos hemos limitado a substituir la diosa de la razón que Hebert preconizara, por la deidad del Estado y sus hieráticos mentores; porque vemos en el hombre a nuestro hermano, no podemos admitir en la patria de nuestros mayores al mundo totalitario de persecución y de crimen. Así pensaba Yrigoyen con un hondo sentido cristiano de la vida en su movimiento de reparación nacional, precursor de estos días que vivimos. Y ése es el pensamiento de Perón, que va buscando la justicia social en las eternas fuentes del cristianismo y en los límpidos manantiales de la historia.

El proyecto que estudiamos en este momento da formas procesales a todas las innovaciones que para el bien del obrero se han experimentado en la legislación de fondo, y crea los funcionarios encargados de su aplicación.

Las diferencias fundamentales entre el valor del trabajo y el valor capital han originado una legislación especializada con caracteres propios, que todos los pueblos civilizados han acogido con notoria satisfacción, por su finalidad humana y fraterna. Pero esa nueva estructura del derecho del trabajo perdería su eficacia si no existiera el instrumento adecuado para hacerla efectiva.

La justicia civil y comercial tiene caracteres propios, por la materia que le sirve de base, y

no se concilia su actividad plena de recaudos y exigencias con la indispensable rapidez y flexibilidad que debe poseer la que aplique el llamado nuevo derecho. Es imprescindible contemplar el fondo y la forma en materia de derecho. Todas las legislaciones así lo han considerado al dividir en materias la aplicación del derecho y al crear la especialización dentro del mismo. Podrían señalarse numerosos ejemplos en nuestro país, tanto en el orden nacional como en el local para demostrarlo, y cabe al respecto recordar lo que la comisión parlamentaria que redactó el Código Penal manifestó en su informe, cuando expresaba que la nueva ley, sin la complementaria de un nuevo Código de Procedimientos, haría poco menos que innocua su aplicación en sus aspectos fundamentales.

La legislación del trabajo tiene, por otra parte, caracteres específicos que obligan a una continuada adecuación. La técnica, con su constante progreso, determina nuevas manifestaciones en las actividades del trabajo, que es necesario contemplar. Una justicia especializada podrá realizar esa función con mayor eficacia, porque actuará pendiente de sus más legítimos reclamos y se constituirá así en una magnífica fuente de futuras reformas.

La justicia del trabajo, además de los aspectos técnicos y de especialización que importa, tiende a crear un clima propicio a fin de que el más humilde no se vea coonestado en sus reclamos por engranajes complicados y costosos, que enfrentan a las dos partes en posibilidades distintas. Por un lado, el de quien posee recursos, experiencia e inclusive trato social, y por el otro, el de quien se ve reducido a su pequeño ambiente, con alcance tan limitado que por lo general, no va más allá de la cruda y escueta expresión del hecho acontecido.

La justicia denominada de menor cuantía, tiende a salvar aquellas dificultades para la solución de pequeños conflictos de carácter familiar. Nadie podría pensar en su inutilidad por el hecho de que debiendo sus fallos ajustarse a la ley, pudieran los jueces de la jurisdicción civil, aplicar la ley en tales casos, bastando para salvar dificultades de tiempo con aumentar el número de jueces. No, esas jurisdicciones suponen una necesidad imperiosa que responde a necesidades vividas y no a simples lucubraciones de carácter teórico de pura docencia académica.

Si reconocemos en el trabajo la fuente de un nuevo derecho, que se ha concretado, ya en una legislación especial, ésta quedaría desvirtuada si no se le adjudicara el instrumento adecuado para su mejor aplicación.

No ha de pasar un decenio sin que estas transformaciones sociales que ahora parecen revolucionarias se conviertan en una natural nor-

ma jurídica del Estado, así reconocida por todas las opiniones. Alguien dijo con gran verdad —creo que Anatole France—, que todas las ideas sobre las cuales reposa hoy la sociedad han sido subversivas antes de ser tutelares.

Toda la construcción jurídica que ha elaborado la revolución hasta ahora en materia obrera, carecería de significado práctico si una ley procesal no la hiciera aplicable en el grado que esas conquistas lo exigen.

Estamos viviendo y experimentando un derecho nuevo y no es posible someterlo en su aplicación a leyes vetustas que lo ignoraron y que terminarían por ahogarlo entre los vericuetos de sus articulados, ricos en dialéctica y pobres en celeridad y en eficiencia.

No se crea con esto, señor presidente, que renunciamos a la reforma futura y necesaria de esos códigos procesales, resabios de una época pasada y que desentonan con las conquistas modernas del derecho. Por el contrario, es nuestro firme propósito encarar lo más pronto posible la reforma integral de esas leyes de procedimiento; pero en este momento legislamos para el trabajador y por encima de éste, para la justicia social.

Así, tampoco olvidaremos que es menester fijar las normas del contrato de trabajo, coordinando y armonizando las leyes dispersas que reglan algunos de sus aspectos y emancipándolo definitivamente del viejo tronco del derecho civil.

También tendremos que abocarnos con urgencia a la tarea de estructurar los principios que regulen el contrato colectivo de trabajo, instrumento de paz social que la Secretaría de Trabajo y Previsión ha empleado con tan señalado éxito, pero cuyo cumplimiento, ahora, queda librado a la buena voluntad de las partes que lo subscriben.

Serán estas dos últimas las leyes fundamentales de nuestro derecho del trabajo y de sus previsiones dependerá en cierta medida, la armonía en el trabajo, la justicia en las relaciones que de él deriven, la conciliación de los sectores laboriosos, el cese de toda lucha áspera o de toda controversia violenta que tanto repercuten en la economía de la República y en el orden público.

La legislación obrera ha cobrado autonomía como ciencia del derecho, distinguiéndose de las distintas ramas de éste, por cualidades típicas y por razones de especialidad.

La justicia distributiva, aquella de que nos habla sabiamente Santo Tomás, concretada por León XIII y Pío XI, constituye el andamiaje de un derecho que protege a las clases proletarias, poniéndolas a un mismo nivel que sus patronos.

El proyecto en discusión compendia los adelantos procesales que exige esta materia, contribuyendo a proporcionar al procedimiento de los tribunales del trabajo, sencillez, probidad y eficacia, necesarias a la índole de los problemas jurídicos que deberán resolver y juzgar. Los magistrados del trabajo, deberán ser los verdaderos jueces de la revolución, no porque inclinen su espíritu a determinadas tendencias políticas, ni sometan sus fallos augustos a otras inspiraciones que no sean la justicia y la equidad, sino porque los jueces, al decir de Thaller «son los que deben hacer progresar el derecho por la adaptación de sus reglas a la verdad y al movimiento de la vida».

La experiencia ha demostrado, en el espacio de más de un año que han funcionado los tribunales del trabajo, la eficiencia del decreto 32.347 que los creó; por eso, el proyecto que estamos considerando, sólo tiende al perfeccionamiento del régimen implantado por aquél.

Estamos legislando para el futuro. Es por ello que debemos prever el porvenir al par que legislamos para la asombrosa realidad del presente.

El derecho obrero, se convierte gradualmente en un cuerpo de legislación que necesariamente tiene que crecer en forma paralela, en lo que a su importancia se refiere, con el derecho civil y comercial.

El obrero de hoy es un factor económico fundamental en la vida de nuestro país; el trabajo reivindica para sí el lugar que le corresponde frente al capital, y torna a concurrir con éste en igualdad jurídica y social, en la economía del Estado.

El señor presidente de la Nación ha pronunciado palabras trascendentales al respecto. Ha manifestado «que la tierra no debe ser un bien de renta, sino un bien de trabajo, porque sólo así podrá justificarse moralmente que un elemento de la naturaleza, que no ha creado el hombre, pueda someterse a la aprobación particular». Compendio admirable de una doctrina filosóficoeconómica, bello paradigma de una concepción del mundo, generosa y altruista.

Acabamos de dejar en el camino de la historia una guerra cruel y bárbara, salpicada de sangre inocente y exornada con la presencia fatídica del hambre, la muerte y la miseria. Si queremos olvidar esa noche sombría poblada de apocalípticos fantasmas y deseamos dar al mundo del mañana una base de felicidad, fundada en la paz y en el respeto mutuo de la humanidad, legislemos siguiendo el precepto cristiano del amor al prójimo, hagamos de la igualdad de los hombres nuestro dogma social, descubriendo en nuestros semejantes el sello divino del Creador y la síntesis admirable del universo.

Señor presidente: Esta justicia del trabajo que con el tiempo funcionará en todo el territorio de

la Nación, por la naturaleza substantiva de su materia, requiere un concepto humano y moderno para su noble aplicación. Es el concepto que preconizaba D'Aguezau, cuando decía que los hechos humanos había que juzgarlos humanamente... El señor presidente de la Nación, en su mensaje inaugural del día 4 de junio, decía con profunda verdad: «Pongo el espíritu de justicia por encima del Poder Judicial, que es requisito indispensable para la prosperidad de las naciones; pero entiendo que la justicia, además de independiente, ha de ser eficaz, y que no puede ser eficaz si sus ideas y sus conceptos no marchan al unísono con el sentimiento público. Muchos alaban en los tribunales de justicia su sentido conservador, entendiendo por ello que defienden lo tradicional por el solo hecho de serlo. Lo considero un error peligroso, tanto porque puede poner en oposición a la justicia con el sentimiento popular cuanto porque, a la larga, produce un organismo anquilosado.» Y sigue: «La justicia, en sus doctrinas, ha de ser dinámica y no estática. De otro modo, se frustran respetables anhelos populares y se entorpece el desenvolvimiento social con grave perjuicio para las clases obreras. Estas, que son, naturalmente, las menos conservadoras en el sentido usual de la palabra, al ver cómo se les cierran los caminos del derecho, no tienen más recursos que poner su fe en los procedimientos de la violencia.»

Considero, señor presidente, que este despacho estructura con mayor acierto esa legislación del trabajo, pero, aun así, ella debe ser ampliada a los territorios nacionales, donde se radican grandes industrias y núcleos vigorosos de trabajo obrero, como así, también, a todas las provincias, mediante el procedimiento de convenios con esos Estados particulares, con lo que se cubriría el aspecto constitucional, respetándose la autonomía de las provincias.

El Poder Ejecutivo, recientemente, ha promovido esa iniciativa, dictando el decreto 6.717, que somete al Honorable Congreso. Por ese decreto, se invita a las provincias a subscribir con el gobierno de la Nación un tratado de administración de justicia para la organización de los tribunales del trabajo.

Estoy conforme con el pensamiento central que sustenta ese decreto, aun cuando pienso que debiera excluirse la idea de «tratado» o de «pacto», para ir directamente a dejar establecido que los gobiernos de provincia podrán adherir al beneficio de la justicia del trabajo conviniendo con el gobierno central lo conveniente a tal fin, para lo cual sus legislaturas dictarán leyes concretas que promulgarán sus gobernadores.

Comparto la opinión del Poder Ejecutivo, en su mensaje de 7 de agosto último, haciendo obligatorio el patrocinio letrado del trabaja-

dor en sus gestiones ante la justicia del trabajo, y para lo cual proyecta cargos de defensores oficiales.

Es evidente que con esa medida se cumple una previsión de amparo para el trabajador que, actuando solo, puede caer en las redes de su propia ignorancia, o en las asechanzas de la malicia extraña.

El despacho de la comisión, al mantener los principios básicos de la estructuración orgánica de la justicia del trabajo ha dispuesto, con patriótico acierto y buen sentido, que los jueces de esa justicia sean argentinos nativos.

Me felicito de esta iniciativa, a la que considero una conquista reivindicatoria de la revolución de junio.

Sólo deseo que ese principio normativo para la designación de los jueces se incorpore a la justicia federal, ordinaria y de paz letrada, a la justicia de todo el país.

La justicia debe estar en manos argentinas, en magistrados nacidos en territorio argentino, que sientan la voz ancestral de su pueblo y de su historia. Las universidades argentinas dan saldos enormes de profesionales nativos que postulan funciones, que por un contrasentido paradójico van a parar a manos extranjeras. Eso no puede ser y debe terminar para siempre.

La Asociación de Abogados de Buenos Aires, en su nota dirigida a este Honorable Senado con fecha 13 de agosto último, promueve una iniciativa que recojo con simpatía, porque tiende a resolver, o por lo menos contribuye a resolver, la morosidad de la justicia. Me parece oportuno incluir en el articulado del despacho de la comisión, una disposición por la cual se haga obligatorio para el juez dar cuenta a la cámara de su fuero, de los motivos por los cuales en cada caso, no despachare dentro de los plazos legales, ya sea al proveer un escrito o al dictar sentencia. La omisión por el juez de tal informe, que debe tener caracteres obligatorios, debe considerarse falta grave.

Cuando se estudie a fondo, como lo proyectaremos y lo haremos, las leyes procesales, en lo civil y comercial, como en lo criminal y correccional, hemos de tener bien presente aquel viejo apotegma: «Una justicia tardía es la mayor de las injusticias.»

Por último, considero que a la justicia del trabajo deben fijársele los mismos sueldos que a la justicia civil y comercial de la Capital, porque así corresponde, dada la jerarquía de estos órganos nuevos de la administración de justicia, cuya función abarca los más numerosos e importantes problemas de la vida jurídica y social contemporánea.

Con la más absoluta confianza de que esta ley será el complemento vital de la Secretaría de Trabajo y Previsión, organismo creado para regular las relaciones del trabajo y del capital, dando efectividad a la justicia social en esta hora histórica; dando solución efectiva a los múltiples y graves problemas que se derivan del trabajo, haciendo tolerable y humanizando la vida de las clases necesitadas, redimiéndolas de la esclavitud, de la expoliación, del egoísmo y de la injusticia, votaré esta ley como un mandato inexcusable del patriotismo.

No desconozco la obra inmensa realizada; me inclino reverente ante los creadores de nuestra legislación vigente, pero repitamos con Bertauld: «Una gran admiración por todo lo que se ha hecho, y un gran asombro por lo que aun queda por hacer.»

He terminado. (*¡Muy bien!*)

Sr. Presidente (Bavio). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar, en general, el despacho de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Bavio). — En consideración en particular.

Los artículos que no se observen se darán por aprobados.

—Apoyado.

—Sin observación, se votan y aprueban los artículos 1º a 9º, inclusive.

—Se lee el artículo 10.

Sr. de Lázaro. — Pido la palabra.

Sugiero un pequeño agregado a este artículo, que aclara la edad que deben tener estos funcionarios. Por razones de orden jerárquico, deben ir en primer lugar los miembros de las cámaras de apelaciones y luego los jueces.

Diría así este agregado: «Los miembros de la Cámara de Apelaciones y los jueces de primera instancia serán nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, debiendo tener los primeros —vale decir los miembros de la Cámara de Apelaciones— no menos de 30 años, y los segundos 25 y además reunir estos funcionarios...», etcétera. Sigue luego la redacción del artículo tal cual está.

Es una variación con respecto a la edad, que ahora figura en términos generales, diciendo solamente: mayor de 25 años. Creo que los miembros de las cámaras de apelaciones deben tener una mayor edad.

Sr. Presidente (Bavio). — ¿Acepta la comisión la modificación?

Sr. Antille. — Sí, señor presidente, pero me parece que tendría que ser al revés y decir: «debido los primeros tener treinta años, y los jueces veinticinco».

Sr. de Lázaro. — Sí, pero con la redacción que tiene el proyecto quedaría: «Los miembros de la Cámara de Apelaciones y los jueces de primera instancia, serán nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, debiendo tener los primeros no menos de 30 años y los segundos más de 25, y, además, reunir estos funcionarios...», etcétera.

Sr. Antille. — Aunque no diga «estos funcionarios».

Sr. de Lázaro. — Entonces, esto de mayor de veinticinco años, está de más.

Sr. Antille. — Claro, habría que suprimirlo.

Sr. Presidente (Bavio). — Se va a leer el artículo, tal como queda con la modificación propuesta.

Sr. Secretario (Job). — (*Leyendo*): «Artículo 10. — Los miembros de la Cámara de Apelaciones y los jueces de primera instancia, serán nombrados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, debiendo tener los primeros no menos de 30 años y los segundos, más de 25 años, y, además, reunir las siguientes condiciones: ser argentino nativo, abogado, haber ejercido en el país, durante cuatro años, su profesión, o desempeñado por igual término empleo judicial. Dichos magistrados cesarán automáticamente en sus funciones al cumplir 65 años de edad.»

Sr. Antille. — La comisión acepta.

Sr. Presidente (Bavio). — Se va a votar el artículo 10, con la modificación propuesta por el señor senador de Lázaro y aceptada por la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación, se leen y aprueban los artículos 11, 12, 13 y 14.

—Ocupa la Presidencia el presidente del Honorable Senado, doctor J. Hortensio Quijano.

—Se lee el artículo 15.

Sr. de Lázaro. — Pido la palabra.

También propongo dentro de la redacción de este artículo, un agregado, después de las palabras «presidente y vicepresidente serán elegidos anualmente por mayoría de votos», que consistiría en lo siguiente: «no pudiendo ser reelegidos sino después de un período».

Sr. Antille. — ¿En el artículo 15, señor senador?

Sr. de Lázaro. — Sí, señor senador.

Sr. Antille. — ¿Y qué razones habría para no reelegirlos? Eso es lo que yo desearía saber, porque se trata de un voto que deben dar los colegas. Desde luego, si no desempeñan bien el cargo, no habría ningún inconveniente; pero en caso contrario, no hay daño alguno en que sean reelectos.

Sr. de Lázaro. — Era para evitar la permanencia.

Sr. Ramella. — Pido la palabra.

Aparte de la conveniencia de la continuidad en la función del presidente de la Cámara de Apelaciones, está la de que si se cambiara cada año el presidente, habría el peligro de transformar la estructuración de las salas, y eso podría traer grandes trastornos a la finalización normal de los juicios.

Sr. de Lázaro. — Retiro, entonces, mi indicación.

—Sin otra observación, se aprueban los artículos 15 y 16.

—Se lee el artículo 17.

Sr. de Lázaro. — Pido la palabra.

También aquí sugiero la conveniencia de que el procurador general del trabajo sea incluido en estas reuniones, quedando el artículo así: «La Cámara de Apelaciones...», etcétera, y agregar después de la palabra «ley», «...o el procurador general del trabajo entendiera que es conveniente fijar la interpretación de la ley o de la doctrina aplicable». Desde el punto de vista de la iniciativa que podría llevar ese funcionario.

Sr. Antille. — Es que la Cámara de Apelaciones tiene el derecho de exigir que se reúna en pleno, porque los fallos contradictorios sólo pueden modificarse en el cambio de ideas entre los miembros, pero no con el procurador general del trabajo, puesto que éste podría tener la iniciativa de solicitarlo, pero no puede obligar a la cámara. Esa es la diferencia y por eso la comisión no aceptaría la insinuación que formula el señor senador.

Sr. de Lázaro. — Entonces retiro la indicación.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 17.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación se lee y aprueba el artículo 18.

—Se lee el artículo 19.

Sr. de Lázaro. — Pido la palabra.

En este artículo 19, al final del inciso b) pondría este agregado, para mayor aclaración: «...con sujeción al artículo 39». Este artículo 39 es el que establece la competencia de la justicia del trabajo.

Sr. Antille. — Entiendo el pensamiento del señor senador, aunque creo que sería innecesario el agregado, porque ya está dicho en qué materia van a entender estos jueces; pero como lo que abunda no daña, la comisión acepta el agregado.

Sr. Presidente. — Está a consideración el artículo 19, con el agregado aceptado por la comisión.

—Se aprueba con el agregado propuesto.

—Se lee el artículo 20.

Sr. de Lázaro. — Pido la palabra.

En el segundo párrafo de este artículo, sugiero la conveniencia de que el procurador general del trabajo reúna las condiciones requeridas para ser camarista.

Sr. Antille. — Existe la dificultad de la edad. Por otra parte, el ministerio público no tiene la responsabilidad del camarista.

Sr. Bavio. — El procurador del trabajo es el que representa al ministerio público.

Sr. Antille. — A eso me refiero, y creo que no tiene la jerarquía de los vocales de la Cámara de Apelaciones; por eso es que se asimila a los jueces de primera instancia.

Sr. Bavio. — Porque no dan sentencia.

Sr. Antille. — Las comisiones no aceptan la modificación.

Sr. de Lázaro. — Bien, señor senador.

Sr. Presidente. — Queda aprobado el artículo 20 en la forma despachada por la comisión.

—Se leen y aprueban sin observación los artículos 21 y 22.

—Se lee el artículo 23.

Sr. de Lázaro. — Pido la palabra.

Creo que existe la conveniencia de adoptar aquí la recusación sin causa, suprimiendo la palabra «no», donde dice «no podrán». Además, propongo un agregado: «La recusación sin causa deberá ser deducida en primera instancia al interponer y contestar demanda por actor y demandado, respectivamente, y en segunda instancia, dentro de las 48 horas de recibido el expediente en la cámara. Cada parte y en cada juicio sólo podrá recusar a un juez y a un miembro de la Cámara de Apelaciones.»

Me refiero a la conveniencia de adoptar la recusación sin causa, porque, a mi juicio, ofrece una mayor garantía procesal y además da hasta la evidencia de que se asegure la defensa en juicio.

Sr. Antille. — Pido la palabra.

Este artículo fué estudiado con el mayor cuidado por la comisión, estando presente el señor ministro de Justicia e Instrucción Pública. Debo recordar al señor senador que el propósito de esta ley es acelerar el trámite de los juicios, teniendo en cuenta que por lo general intervienen en ellos obreros, que van a comparecer ante los jueces para solicitar el amparo de la justicia. Si se deja librado al patrono, a que por medio de recusaciones sin causa lleve el asunto a otro juzgado y obligue a los obreros a trasladarse a grandes distancias para seguir enten-

diendo en el trámite del asunto, esta justicia va a ser más tardía que la ordinaria.

La recusación debe tener alguna causa; hay que confiar en la lealtad con los principios de justicia de los jueces. No habiendo motivo para recusar, no se ve la necesidad de que se traslade el pleito a otro juzgado. Me parece que el no poder ser recusado el juez, es una garantía para el obrero que va a pleitear contra el patrono, y es por eso que se ha mantenido este concepto.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 23 tal como ha sido despachado por la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa. Igualmente, se aprueba el artículo 24.

—Se lee el artículo 25.

Sr. Antille. — Pido la palabra.

En este artículo habría que introducir una pequeña modificación. En donde dice «del tribunal del trabajo» habría que poner «del tribunal del fuero del trabajo».

Sr. Presidente. — ¿Cómo quedaría el artículo?

Sr. Secretario (Job). — (*Leyendo*): «En caso de licencia u otro impedimento, los secretarios serán reemplazados por otro empleado del tribunal del fuero del trabajo, que deberá reunir las condiciones exigidas por el titular.»

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo en la forma que acaba de leerse.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 26.

Sr. Bavio. — Pido la palabra.

Yo sugeriría a la comisión que se diga que los peritos o los nombramientos de oficio deben ser por sorteo, a fin de evitar favoritismos.

Sr. Presidente. — ¿Acepta la comisión el agregado?

Sr. Antille. — Sí, señor presidente, la comisión acepta.

Sr. Presidente. — Se va a dar lectura al artículo 26 con el agregado propuesto.

Sr. Secretario (Job). — (*Leyendo*): «La Cámara de Apelaciones llevará un registro de peritos y establecerá las condiciones y requisitos que deberán reunir a los efectos de su inscripción. Los nombramientos de oficio deberán recaer en los peritos inscritos y por sorteo, quienes no podrán, sin justa causa, dejar de aceptar el cargo, bajo pena de exclusión del registro.»

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 26 en la forma que acaba de leerse.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se leen y aprueban sin observación los artículos 27 y 28.

—Se lee el artículo 29.

Sr. de Lázaro. — Deseo preguntar por qué no se incluye en este artículo a los representantes del ministerio público.

Sr. Antille. — Si el señor senador hace indicación en ese sentido, no habría inconveniente.

Sr. Herrera. — Podría quedar así: «Los miembros de la Cámara de Apelaciones y del ministerio público...», etcétera.

Sr. Antille. — Los miembros del ministerio público no forman cámara, de manera que tendrían que figurar después de los jueces.

Sr. Presidente. — Se va a leer cómo quedaría el artículo

Sr. Secretario (Job). — (*Leyendo*): «Los miembros de la Cámara de Apelaciones, jueces de primera instancia, miembros del ministerio público, vocales de la Comisión de Conciliación y secretarios, no podrán desempeñar ningún otro empleo público o privado, ni ejercer su profesión.»

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo con las modificaciones introducidas.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 30.

Sr. de Lázaro. — Pido la palabra.

¿No convendría aquí la inclusión de la Defensoría de Pobres y Ausentes?

Sr. Antille. — En la ley sólo se consignan los empleados de los tribunales, pero no los representantes del ministerio. Yo le rogaría al señor senador que no proponga esa modificación.

Sr. de Lázaro. — Si así está claro, la retiro.

Sr. Presidente. — Entonces, se va a votar el artículo 30 tal como figura en el despacho de comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se leen y aprueban sin observación los artículos 31 a 39, inclusive.

—Se lee el artículo 40.

Sr. de Lázaro. — Pido la palabra.

Me parece incongruente el final...

Sr. Bavio. — Está bien claro, señor senador.

Sr. Antille. — Lo que se hace es obligar al juez a decir qué días deben hacerse las notificaciones por nota; no se deja al criterio del juez o del secretario. En el primer decreto de trámite se dice: para notificaciones tales días; generalmente martes y viernes.

Sr. Bavio. — Es una mayor garantía para el litigante.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 40 del despacho.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación, se leen y aprueban los artículos 41 a 70, inclusive.

—Se lee el artículo 71.

Sr. de Lázaro. — Pido la palabra.

En la última frase de este artículo se dice: «La decisión será apelable dentro del término de dos días.» Sugiero la conveniencia de modificarlo en la siguiente forma: «La decisión será apelable juntamente con la sentencia en los casos que el recurso sea procedente contra ésta.»

Esta es la redacción del decreto ley, y entiendo, que convendría mantenerla para evitar dilaciones en el procedimiento, que incidirán en perjuicio del trabajador.

Sr. Ramella. — Pido la palabra.

Este asunto que plantea el señor senador por Tucumán fué estudiado en el seno de la comisión, y se consideró que era preferible mantener este criterio de la apelación de las excepciones que se dedujeran, porque si bien es cierto que con el criterio que expone el señor senador podría abreviarse la duración del juicio, podría también ocurrir que si se difiriera la consideración de lo relativo a las excepciones al momento de dictar sentencia, prosperara, por ejemplo, la excepción, o no prosperara, y no se pudiera decidir sobre el fondo del asunto. En la experiencia judicial que tengo, he comprobado que es conveniente este sistema que se propicia en el artículo, porque hay cuestiones judiciales que es imposible considerar juntamente en la sentencia, porque una se opone a la otra, y en vez de ser motivo para el aceleramiento de los juicios, son causa de que se alarguen.

Como digo, este punto se estudió bien en el seno de la comisión, y se pesaron las razones, el pro y el contra, y se consideró que éste era el mejor sistema, sin perjuicio de que si en la práctica resultara que no es eficaz, se podría modificar.

Por mi parte, insistiría en la redacción del artículo tal cual está.

Sr. de Lázaro. — Dadas las razones expuestas por el señor miembro informante de la comisión y su larga experiencia jurídica, que yo no poseo, no tengo ningún inconveniente en retirar la proposición que he formulado.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 71, del despacho de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación se leen y aprueban los artículos 72 al 82.

—Se lee el artículo 83.

Sr. Ramella. — En este artículo hay un error gramatical: debe decir «comparecencia» y no «comparencia».

Sr. Presidente. — Sí, señor senador; ya se ha subsanado el error. Se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa. Igualmente se leen y aprueban sin observación los artículos 84 al 87.

—Se lee el artículo 88.

Sr. Antille. — Aquí se ha deslizado un error: donde dice «por motivo fundado de inhabilidad o en hechos...», debe decir «por motivo de inhabilidad o fundado en hechos». Porque la tacha se funda en hechos o en motivos de inhabilidad.

Sr. Bavio. — Exactamente. Corresponde la modificación.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 88 con la modificación propuesta.

—Se vota y resulta afirmativa. Igualmente se leen y aprueban sin observación los artículos 89 y 90.

—Se lee el artículo 91.

Sr. Bavio. — Creo que en lugar de la palabra «local» conviene poner la palabra «lugar».

Sr. Antille. — La comisión acepta.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 91 con la modificación propuesta.

—Se vota y resulta afirmativa. Igualmente se lee y aprueba sin observación el artículo 92.

—Se lee el artículo 93.

Sr. de Lázaro. — Pido la palabra.

Sugiero la conveniencia de una modificación en la redacción de este artículo, donde dice: «Los peritos serán nombrados por acuerdo de partes o de oficio.» Me parece conveniente suprimir esta cuertión «de acuerdo de partes y en caso de que ello no ocurra» porque en la práctica se ha demostrado la ineficacia e ineficiencia de ese procedimiento. Entonces, la redacción que yo propondría sería ésta: «Los peritos serán nombrados de oficio y por sorteo —porque el artículo 26 que hemos sancionado habla del nombramiento de los peritos, que debe ser por sorteo — pudiendo su número variar de uno a tres, a juicio del magistrado y de acuerdo con la índole o monto del asunto, objeto de la pericia.» Esto me parece mucho más sencillo.

Sr. Antille. — Me parece inconveniente el separar y desconocer la importancia de la voluntad de las partes en cuanto a la designación de los peritos. Nada es más digno de respeto que el acuerdo de ambas partes con referencia a un perito, en quien tienen confianza que ha de producir su dictamen con toda honestidad. No se puede substituir el perito que las partes designan con el que de oficio o por sorteo les pueda tocar. No se puede suprimir el acuerdo; la autonomía de la voluntad de las partes se tiene aquí como un medio para reglar las diferencias en el pleito.

Las partes pueden elegir perito; en caso de que ello no ocurra, entonces, viene de oficio o por sorteo.

Sr. de Lázaro. — El artículo quedaría como está, pero en la parte «o de oficio», ¿no convendría agregarle «y por sorteo»?

Sr. Antille. — La comisión acepta el agregado de las palabras «y por sorteo».

Sr. Presidente. — Se va a leer el artículo 93 con el agregado propuesto.

Sr. Secretario (Job). — (*Leyendo*): «Los peritos serán nombrados por acuerdo de partes, o de oficio y por sorteo en caso de que ello no ocurra, pudiendo su número variar de uno a tres, a juicio del magistrado y de acuerdo con la índole o monto del asunto objeto de la pericia.»

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 93 en esa forma.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee y aprueba el artículo 94.

—Se lee el artículo 95.

Sr. Ramella. — Pido la palabra.

En este caso, habría una incongruencia con lo que hemos agregado, de que los peritos serán nombrados por sorteo.

Sr. Bavio. — Cuando no sean funcionarios de la administración.

Sr. Ramella. — Pero entonces queda siempre la puerta abierta para las designaciones arbitrarias o maliciosas.

Sr. Antille. — Pero en el caso de que haya un registro de inscripciones, entonces, se haría el sorteo. Con ese distinguo se puede aceptar.

Sr. Bavio. — El señor senador plantea otra cuestión.

Sr. Ramella. — El artículo 95 establece que el juez puede nombrar peritos que sean empleados de la administración nacional. Si hemos establecido antes que los peritos serán nombrados por sorteo...

Sr. Bavio. — Cuando no sean funcionarios de la administración nacional.

Sr. Soler. — Hay que modificar lo anterior.

Sr. Bavio. — No habría que modificar lo anterior. Entiendo que el espíritu del proyecto es abaratar los juicios y dar facultad a los jueces para que recurran a los funcionarios de la administración como peritos en caso necesario. Ahora bien, cuando eso sucede, el juez tiene la facultad de nombrar de oficio a los funcionarios nacionales que suponen una garantía. En cambio, cuando se van a tomar de las listas de peritos inscritos, sean contadores o rematadores, entonces se recurre al sorteo.

Sr. Ramella. — Con esta aclaración quedaría bien el artículo.

Sr. Presidente. — Se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 96.

Sr. Bavio. — Pido la palabra.

Preguntaría a la comisión si no le parece muy breve el término de cinco días para dictar sentencia.

Sr. Antille. — Indudablemente es breve, pero se trata de juicios casi sumarios, y ése es el pensamiento del Poder Ejecutivo, al exigir también un término que no es de cinco días, sino algo más, pero que no supera los diez días. De manera que teniendo en cuenta el espíritu de la ley, el carácter del juicio y tratándose de una materia conocida, donde no hay incidencias mayores, es de aceptar y hay que obligar al juez a que dicte el fallo con rapidez, porque son cuestiones que interesan a los obreros y no pueden estar dependiendo de largos fallos.

Sr. Presidente. — Se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación se leen y aprueban los artículos 97, 98 y 99.

—Se lee el artículo 100.

Sr. de Lázaro. — Pido la palabra.

A título de consulta, deseo preguntar si este artículo 100 no afecta las garantías del artículo 17 de la Constitución.

Sr. Antille. — Pido la palabra.

Se trata de una facultad concedida al juez para dictar un fallo dentro de lo que se ha cuestionado en el pleito y agregando, como una indemnización por los perjuicios que haya sufrido el acreedor, obrero en general, un monto superior a la condena, del 20 %. En los casos de indemnización por daños y perjuicios, sabe el señor senador que el juez falla fijando, con criterio personal, de acuerdo con los antecedentes que existan en el pleito, una suma para indemnizar. Esto es lo que se indemniza, pero el principio no va contra ningún artículo constitucional, puesto que él se basa en el derecho y en la justicia, según el cual tiene que sufrir algún perjuicio para ser indemnizado, pero no por la suma que pierde, por ejemplo, por los salarios, sino por el tiempo que ha perdido en pleitear y conseguir que le paguen la cantidad que tiene derecho a percibir.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 100.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación, se leen y aprueban los artículos 101 y 102.

—Se lee el artículo 103.

Sr. Bavio. — En ese caso, señor presidente, también habría que decir que el ministerio público, los tribunales o el fuero del trabajo...

Sr. Antille. — Por abreviación se podría decir así. Pero por aclaración es mejor como ha sido redactado por la comisión.

Sr. Bavio. — No hago cuestión, señor senador.

Sr. Luco. — Me parece que los 500 pesos que se fijan en este artículo son muy pocos, porque con los salarios que se pagan en estos momentos, todas las cuestiones pasarían de 500 pesos. Yo haría indicación en el sentido de que fuesen por lo menos 1.000 pesos.

Sr. Antille. — La comisión acepta. ¿El señor senador aceptaría un término medio transaccional de 800 pesos?

Sr. Luco. — Cómo no, señor senador.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo con la modificación propuesta por el señor senador por San Luis, fijando la suma de 800 pesos en lugar de 500 pesos.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación, se aprueban los artículos 104 y 105.

—Se lee el artículo 106.

Sr. de Lázaro. — Aquí dice «diez días...».

Sr. Ramella. — Se trata de un error. Debe decir «tres días».

Sr. de Lázaro. — Creo que podría redactarse este artículo en esta forma: «Recibido el expediente, la sala dictará la providencia de autos, y las partes en el término de cinco días podrán informar sobre el recurso en relación.» Y como agregado propongo: «... y cuando se trate de apelación fundada en leyes de previsión social, el término será de treinta días».

Sr. Antille. — ¿Treinta días? Aquí se trata de un informe en que se va a fundar el derecho al recurso en relación, no en general. De manera que ese informe lo puede redactar un abogado en veinticuatro horas. Dar treinta días es hacer que el trámite se prolongue demasiado, y lo que queremos, precisamente, es acelerar el juicio. Por eso es que creo que en vez de diez tiene que reducirse a dos o cinco, pero nunca mantener diez, y menos aumentar a treinta días.

Sr. Ramella. — Podría agregarse que es lo normal cuando los recursos son en relación, que el término sea nada más que de tres días para que las partes informen sobre el recurso.

Sr. Antille. — Es lo normal. Lo que debe observarse es que la frase diez días es un error de copia y aceptar tres días.

—Se aprueba el artículo 106 con la modificación propuesta.

—Sin observación, se aprueban los artículos 107 a 111.

—Se lee el artículo 112.

Sr. de Lázaro. — Pido la palabra.

Dice este artículo: «... por el martillero que el juez designe». ¿No convendría agregar: «por sorteo»?

Sr. Antille. — Sí, señor senador. Se podría decir: «tomándolo de la lista, por sorteo», después de lo leído por el señor senador.

—Se aprueba el artículo 112 con el agregado propuesto.

—Sin observación se aprueba el artículo 113.

—Se lee el artículo 114.

Sr. de Lázaro. — Pido la palabra.

¿No sería conveniente formular un artículo aparte y con carácter general respecto al destino de las multas?

Se podría agregar un artículo nuevo.

Sr. Antille. — Entiendo que no hay más que esté caso en que se menciona la multa concretamente. Esto rige en la Capital, donde hay Consejo de Educación, y me parece que el mejor destino es incorporar las multas directamente a su patrimonio.

Sr. Presidente. — ¿Retira el señor senador por Tucumán su indicación?

Sr. de Lázaro. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 114.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se leen y aprueban, sin observación, los artículos 115 al 121, inclusive.

—Se lee el artículo 122.

Sr. de Lázaro. — Pido la palabra.

Hace un momento, señor presidente, hice mención de que se necesitaba un artículo que destine las multas con carácter general. Yo propongo, entonces, un agregado a ese artículo, en los siguientes términos: «Las multas que se impongan por aplicación de la presente ley, y que no tengan un destino determinado por leyes especiales, serán a favor del Consejo Nacional de Educación.»

Sr. Ramella. — Me parece bien. Tiene razón el señor senador, porque hay varios artículos que establecen multas.

Sr. Presidente. — ¿Sería un agregado, señor senador?

Sr. de Lázaro. — Sí, señor presidente.

Quedaría así: «Artículo 122.—Las multas que se impongan en virtud de lo dispuesto en la presente ley, deberán ser satisfechas dentro de las cuarenta y ocho horas de su notificación y en caso de no hacerse efectivas, se procederá de conformidad con lo que establece el artículo 10 de la ley 11.570.

«Las multas que se impongan por aplicación de la presente ley, y que no tengan un destino determinado por leyes especiales, serán a favor del Consejo Nacional de Educación.»

Como las provincias seguramente van a adherir a esta legislación, esta disposición favorece a todas.

Sr. Ramella. — Muy bien; estoy de acuerdo. Encontrándose ausente el señor presidente de la comisión, como miembro de la misma acepto el agregado propuesto.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 122 con el agregado propuesto.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se leen y aprueban, sin observación, los artículos 123 a 131.

—Se lee el artículo 132.

Sr. Cruz. — Pido la palabra.

Hace pocos días, señor presidente, votamos un proyecto de creación de la justicia electoral, y en el mismo se asignaron a los jueces los mismos emolumentos que los de la justicia ordinaria o federal. No veo por qué estos jueces, que van a entender en esta importante materia, quizá más importante que la electoral, percibirán menos emolumentos. En consecuencia, hago moción en el sentido de que los sueldos de estos jueces del trabajo, se equiparen a los de la justicia ordinaria.

Sr. Herrera. — Apoyado.

Sr. Cruz. — Máxime teniendo en cuenta que ellos no pueden ocupar ningún otro cargo dentro de su profesión, lo que robustece la justicia de mi moción.

Sr. Ramella. — Voy a proponer, asimismo, que los oficiales primeros de la Cámara de Apelaciones y juzgados, ganen por lo menos 700 pesos. Los oficiales primeros de la justicia de paz letrada ganan actualmente esa suma. Y como decía el señor senador por Tucumán, estos jueces tienen una competencia mayor, más importante, que los jueces de la justicia de paz, y, sin embargo, se les ha asignado una suma inferior.

Sr. Vallejo. — La moción del señor senador por Tucumán tiende a equiparar todos estos cargos a los similares de la justicia ordinaria.

Sr. Bavio. — O de la justicia de paz de la Capital.

Sr. Ramella. — Creo que se elevaría mucho el presupuesto en esa forma.

Sr. Vallejo. — Esta justicia del trabajo va a tener una tarea muy abrumadora.

Sr. Herrera. — Pido la palabra.

La justicia del trabajo tendrá, indudablemente, una importancia superior a la de la justicia de paz, e igual a la de la justicia ordinaria.

Por lo demás, no debe olvidarse que la legislación del trabajo, que constituye la materia de este fuero, es ya muy profusa en nuestro país y que desde el punto de vista social es tan importante un juicio de indemnización por

despido en el que se discuten pocos pesos, como la partición de una herencia o el litigio alrededor de una sucesión donde se discutan millones de pesos. El principio de justicia social, muchas veces, está más comprometido en el primer caso que en el segundo.

Es precisamente por ello, que creo que esta justicia del trabajo debe tener la misma importancia y jerarquía de la justicia civil y comercial. Es un error suponer que los pleitos del trabajo son fáciles y comunes, y que los jueces que deben dirimirlos no necesitan poseer mejor ilustración. Se trata, por el contrario, de una materia que requiere por parte de los jueces llamados a entender en ella, una gran ilustración jurídica, no sólo en lo que se refiere al derecho del trabajo, sino también en derecho público y en otra cantidad de materias relacionadas con el moderno concepto de la justicia social.

No existen, por lo tanto, motivos para que los camaristas, jueces y demás magistrados y empleados de la justicia del trabajo, no sean equiparados en materia de sueldos a los demás magistrados de la justicia ordinaria de la Capital.

Por esas razones, yo pido a la comisión aceptar esa modificación en el artículo que discutimos. Propongo, pues, la equiparación de los sueldos de la justicia del trabajo con los de la justicia ordinaria de la Capital.

Sr. Antille. — Pido la palabra.

Antes de ahora he oído las razones que da el señor senador por Catamarca para pedir la ampliación del estipendio que deben recibir los jueces que se crean por esta ley. El nos ha hablado de una jerarquía de esos jueces, pero en realidad se trata de un mayor sueldo que el que hasta hoy gozan los jueces del trabajo.

No estoy de acuerdo con este sentido de la jerarquía. Creo que hay que aumentar los sueldos, sí, porque son bajos en relación con el aumento general de los artículos de consumo y otros, que son indispensables para ellos como para los demás. Pero no creo que ese aumento deba ser tan excesivo que los equipare a los jueces de primera instancia, y hasta por las razones que ha dado el señor senador. No se trata más que de aplicación de fallos en los conflictos obreros regidos por leyes obreras, que si el señor senador por Catamarca las enumera vería que pueden contarse con los dedos de la mano. Esta justicia entenderá en los conflictos sobre salarios, de cuantía muy disminuída, en cuestiones de despidos, que también suceden pocas veces, y en casos de accidentes de trabajo. Me parece que no hay otros. En cambio, los jueces de primera instancia entienden en todos los asuntos civiles que pueden presentarse a diario y establecen jurisprudencia nueva, porque hay casos modernos que no han sido contemplados por jueces anteriores, y aplican las leyes que el Congreso sanciona cada

tanto, lo que exige una erudición y una preparación especializada que no es requerida por estos otros jueces del trabajo.

Sé que se ha movido mucho el interés de ciertos círculos para que los sueldos que aquí se fijan sean iguales a los de los jueces de primera instancia; pero no creo que sea justa una resolución en ese sentido, porque tendríamos, por razón de correlación con la jerarquía de los jueces de primera instancia, que aumentarlos para que hubiera igualdad.

Hay que tener en cuenta que lo que se proyecta como sueldo es un aumento con respecto a lo que ganan los jueces de primera instancia que gozan de 1.200 pesos mensuales, y aquí se les asigna 1.500 pesos, y al vocal 1.800 pesos, cuando en realidad los jueces actuales no ganan ese sueldo.

La comisión ha deseado ser justa, pero no ha querido fijar una cantidad exorbitante que vaya a gravitar en los gastos generales del presupuesto de la Nación y en una cantidad que todavía no se sabe a cuánto asciende porque son numerosos los jueces que aquí se fijan, y podrán ser más en adelante.

Se han considerado los sueldos de los empleados equiparados con los de los juzgados, y se les ha aumentado en un 20 a 25 %. Por eso, la comisión no acepta un cambio en la fijación de estos sueldos. Lamento no coincidir con el señor senador, pero ya le expresé antes, que la opinión de la comisión era también la opinión de otros señores senadores, a quienes consultamos en las bancas.

Sr. Ramella. — Pido la palabra.

También hay que hacer notar que en el texto del artículo se dice «hasta tanto se fijen en la ley de presupuesto los sueldos».

Quiere decir, que en realidad el sueldo definitivo ha de fijarse en la ley de presupuesto y eso lo hará el Poder Ejecutivo de acuerdo con las posibilidades económicas, recursos, etcétera.

En principio, estoy de acuerdo en que los jueces deben ser bien remunerados como en el caso de la justicia inglesa en donde ganan sueldos extraordinarios. Creo que no es de buena economía reducir los sueldos de los jueces, sino, por el contrario, aumentarlos al máximo, lo mismo que a los de los funcionarios judiciales.

Yo, con todo, insistiría en que los sueldos de los auxiliares mayores se aumentaran, porque me parece que es muy poco 500 pesos. Propongo que pasen a ser oficiales primeros, con 600 pesos.

Sr. Antille. — Lo acompaño en que se denominen oficiales primeros, con 600 pesos, en vez de auxiliar mayor, con 500. Esta reforma parcial, la aceptamos.

Sr. Presidente. — ¿Cómo quedaría la reforma, señor senador?

Sr. Ramella. — Donde dice «juzgados», en vez de «auxiliar mayor», oficial primero, con 600 pesos.

Sr. Antille. — Asimismo, a la vuelta de la página, donde dice «auxiliar mayor» habrá que poner oficial primero, con 600 pesos.

Sr. Vallejo. — Entonces, ¿el auxiliar principal pasaría a ser auxiliar mayor?

Sr. Antille. — No, señor senador, el auxiliar principal queda igual. Se suprime la designación de auxiliar mayor, por oficial primero, el cargo siguiente queda igual.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo con la modificación propuesta.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 133.

Sr. de Lázaro. — Quizá, antes de entrar al capítulo VI, convendría poner un artículo 132 bis, o 133, corriendo la numeración del articulado, para referirse a la feria. Podría destinarse el mes de enero a feria judicial, debiendo la Cámara de Apelaciones reglamentar la misma. Sugiero la inclusión de ese artículo.

Sr. Antille. — ¿El señor senador desea que se fije un período de feria para los tribunales?

Sr. de Lázaro. — Sí, señor senador; que se establezca para esta justicia un período de feria.

Sr. Antille. — Sería incurrir en un error y producir un perjuicio enorme. No se puede suspender por mucho tiempo la decisión de los casos en que intervienen esos jueces. Por otra parte, la Cámara de Apelaciones podría establecer turnos, sin necesidad de fijarlos en la ley.

Sr. de Lázaro. — De manera que, a su juicio, ¿no es necesario fijarlos en la ley?

Sr. Antille. — No, porque esta ley es de procedimientos, mientras que lo que el señor senador propone es una disposición de carácter orgánico. Eso puede resolverse por una decisión de la Cámara, por medio de una acordada.

Sr. de Lázaro. — ¿Entonces la propia Cámara tiene facultades para establecer su feria o su turno durante un determinado mes?

Sr. Antille. — Exactamente, por la jurisdicción que tiene sobre los demás jueces, es decir, la superintendencia de las cámaras.

Sr. de Lázaro. — Entonces, retiro mi indicación.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 133 del despacho de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 134.

Sr. Antille. — Pido la palabra.

Habría que cambiar en este artículo la designación de auxiliar mayor, por la de oficial 1º.

Sr. Presidente. — Se hará la rectificación, señor senador.

Se va a votar el artículo.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 135.

Sr. Ramella. — Pido la palabra.

Quiero hacer una observación respecto a la colocación del artículo 134, que aparece incluido entre las disposiciones transitorias. A mi juicio, debería figurar como artículo 133, dentro del capítulo V, porque no es una disposición transitoria sino permanente, mientras no sea modificada y el artículo 133 del despacho pasaría a ser 134.

Sr. Antille. — Se alteraría la numeración, poniendo el artículo 134 del despacho en el capítulo V.

—Asentimiento.

—Se aprueban, sin observación, los restantes artículos del proyecto.

Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto.

15

EXPROPIACION DE TERRENOS PARA VIVIENDAS ECONOMICAS

—Se lee:

Despacho de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Negocios Constitucionales y Municipal han considerado el proyecto de ley del señor senador Teisaire por el que se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación, los terrenos edificados o no correspondientes a grupos de nueve manzanas (una central y ocho que inmediatamente la rodean) ubicadas en cada uno de los siguientes barrios de la Capital Federal: Vélez Sársfield, Liniers, Mataderos, Villa Lugano, Villa Soldati, Lomas Zacarelo, Nueva Pompeya, Parque de los Patricios, Barracas, Boca, Flores, Villa Crespo, Chacarita, Paternal, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, bajo de Belgrano; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan le prestéis vuestra aprobación.

Sala de las comisiones, 28 de septiembre de 1946.

Vicente Leonides Saadi. — Alberto Teisaire. — Pablo A. Ramella. — Diego Luis Molinari. — Armando G. Antille.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación, los terrenos edificados o no, correspondientes a grupos de nueve manzanas (una central y ocho que inmediatamente la rodean) ubi-